



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

SOCIÓLOGO CON MENCIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
APLICADAS A LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

“SENTENCIAS Y EJECUCIÓN DE LOS DICTÁMENES DEL
RÉGIMEN REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS AMERICANO.
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ACCIONAR DEL ESTADO
ECUATORIANO (1997) Y ARGENTINO (1991).”

SANTIAGO MARTÍN LARREA AYALA

DIRECTORA: MASTER MARÍA BELÉN GARRIDO

QUITO, 2014.

PARA GRADOS ACADÉMICOS DE LICENCIADOS (TERCER NIVEL)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo, SANTIAGO MARTÍN LARREA AYALA, C.I. 1718834995, autor del trabajo de graduación intitulado: "SENTENCIAS Y EJECUCIÓN DE LOS DICTÁMENES DEL RÉGIMEN REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS AMERICANO. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ACCIONAR DEL ESTADO ECUATORIANO (1997) Y ARGENTINO (1991)", previa a la obtención del grado académico de SOCIOLOGÍA CON MENCIÓN EN RELACIONES INTERNACIONALES en la Facultad de Ciencias Humanas:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través de sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de Universidad.

Quito, 17 de NOVIEMBRE del 2014



SANTIAGO MARTÍN LARREA AYALA
C.I. 1718834995

Agradecimientos

A mi madre por darme el apoyo en el
transcurso de mi vida y guiarme en
todo momento.

A mis Abuelitos que me criaron y me
formaron.

A mis mejores amigxs, Marce, Estefa y
Andrés por todos los momentos,
risas, preocupaciones y alegrías
vividas.

A mi primo Andrés por estar junto a
mi en las buenas y en las malas.

Dedicatoria

Para mi hermano, Elías, con el cual nos
apoyamos en los buenos y malos momentos
A mi novia Ange, quien me apoyo en toda mi
carrera dándome ánimo y fuerzas.

Índice

1. Estados y Regímenes de Derechos Humanos.....	13
1.1 Estados.....	16
1.2 Régimen Internacional de Derechos Humanos (RIDH).....	17
1.2.1 ¿Por qué se forma?.....	18
1.2.2 Características	18
1.2.3 Objetivos.....	20
1.2.4 Clasificación de los Derechos Humanos.	21
1.3 Regímenes Regionales de Derechos Humanos (RRDH).....	23
1.3.1 Consejo de Europa.....	25
1.3.2 Organización de la Unión Africana (OUA).....	28
1.3.3 Liga de países Árabes	31
1.3.4 Régimen del Sureste Asiático.	32
1.3.5 Organización de Estados Americanos (OEA).....	33
1.4 Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).....	34
1.4.1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	37
1.4.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	42
2. Análisis comparativo de casos.....	46
2.1 Caso ecuatoriano – Juan Carlos Chaparro y Freddy Lapo.....	46
2.1.1 Época.	47
2.1.2 Accionar del Estado.	49
2.1.3 Petición de las víctimas ante la CIDH.....	54
2.1.4 Tratamiento dado por la CIDH.	57
2.1.5 Remisión a la CorteIDH.	60
2.1.6 Accionar del Estado posterior a las decisiones de la CorteIDH.....	64
2.2 Caso Argentino – Juan Carlos Bayarri.....	66
2.2.1 Época.	68
2.2.2 Accionar del Estado.	71
2.2.3 Petición de la víctima ante la CIDH.....	72
2.2.4 Tratamiento dado por la CIDH.	73

2.2.5	Remisión a la CorteIDH.	75
2.2.6	Accionar del Estado posterior a las decisiones de la CorteIDH.	77
2.3	Comparación de casos.	79
3.	Conclusiones.	82
4.	Bibliografía	87
5.	Anexos.	94

I. Índice de abreviaturas

ASEAN: Asociación de Naciones del Sureste Asiático.

CADHP: Comisión Africana de los Derechos Humanos y los Pueblos.

CEDH: Convenio Europeo de Derechos Humanos.

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CONSEP: Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

CorteADHP: Corte Africana de los Derechos Humanos y los Pueblos.

CorteIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos.

DADH: Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

DEA: por sus siglas en inglés, Drug Enforcement Administration.

DH: Derechos Humanos.

ESPOL: Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional.

OEA: Organización de Estados Americanos.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

ONG`s: Organizaciones no Gubernamentales.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

OUA: Organización de la Unión Africana.

RIDH: Régimen Internacional de Derechos Humanos.

RRDH: Régimen Regional de Derechos Humanos.

SIDH: Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

II. Resumen

El presente trabajo de tesis analiza los regímenes de derechos humanos, enfoca el análisis en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La investigación se orienta en el cumplimiento de las recomendaciones estipuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha tomado dos casos para el análisis: uno en Ecuador y otro en Argentina.

Los aspectos más relevantes expuestos dentro de la investigación son: la fortaleza del Sistema Interamericana de Derechos Humanos, el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las diferencias de su accionar frente a cada país. Se tomaron en cuenta el contexto histórico, la situación relativa a los derechos humanos y los procesos judiciales de cada uno de los casos, para poder realizar una comparación precisa y significativa.

III. Abstract

This investigation analyzes the human rights regimes, focusing the analysis at the Inter-American Human Rights System. The research focuses on compliance with the recommendations issued by the Inter-American Commission of Human Rights and the judgments of the Inter-American Court of Human Rights. Two cases have been chosen for this analyzes: one in <Ecuador and the other in Argentina.

The most relevant points covered in the research are: the strength of the Inter-American System of Human Rights, the operation of the Inter-American Commission of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights, the differences in their actions against each country, taking into account its historical context, the situation in human rights, judicial processes in each case, to perform an accurate and meaningful comparison.

IV. Introducción

La utilización del concepto de Derechos Humanos (DH) dentro de las Naciones Unidas, en 1945, dio paso a la creación del Régimen Internacional de Derechos Humanos (RIDH). Así se estableció una serie de lineamientos básicos de protección de los seres humanos, que se ha ido desarrollando y reformando con el pasar de los años.

El RIDH cuenta alrededor del mundo con Regímenes Regionales de Derechos Humanos (RRDH) que se establecieron en África (1981), Europa (1959), América y el Caribe (1959), Asia (1967), Liga Árabe (1945) y “está diseñado para alentar a algunos estados a adoptar políticas que de otra manera no iban a perseguir” (Krasner, 1993). Su principal función es propagar y hacer cumplir los DH dentro de los Estados. El RIDH, y dentro de éste la CIDH, surge a partir de la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948.

La CIDH, creada en 1959, busca internacionalizar la protección de los DH en los Estados. Es la primera instancia de reclamación a nivel internacional en el continente, por parte de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales, respecto a las obligaciones que tienen los estados en relación a los DH. Sus principales objetivos son: promover y observar los DH dentro de cada país miembro, recibir, analizar e investigar peticiones individuales que alegan violaciones de DH dentro de los Estados.

El segundo órgano de protección es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), es una institución judicial autónoma. Cumple dos funciones: contenciosa, que consiste en la emisión de fallos regionales vinculantes para los estados declarados responsables de violaciones de DH y, consultiva, que responde preguntas que formulan los estados miembros de la OEA.

Las decisiones tomadas por los miembros de la CorteIDH tienen limitaciones, ya que los estados deciden si se someten, o no, a lo que el régimen imponga. La razón radica en el principio de soberanía, y en el derecho de conducir su política como crean conveniente.

La CIDH y la CorteIDH, dentro de la región cumple la función de proteger a los individuos que reclaman la violación de sus derechos por parte de los diferentes

estados miembros de la OEA. Así, este trabajo busca primero identificar cuál ha sido el accionar de estos organismos al momento de juzgar a los estados ecuatoriano y argentino. Luego se explicará el procedimiento interno de los estados con respecto a cada caso, para de esa manera señalar hasta qué instancia se llegó internamente y analizar por qué los casos fueron llevados a la CIDH. El objetivo es contestar la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre el accionar del Estado ecuatoriano ante el caso de Juan Chaparro y Freddy Lappo, y del Estado argentino en relación al caso de Juan Bayarri, frente a las sentencias emitidas por parte del RRDH en América?

Para contestar a la pregunta, esta investigación está dividida en dos capítulos. En el primero se analizan los estados, su función y accionar dentro del sistema internacional. Posteriormente se expondrá al RIDH, su formación, características, objetivos y las organizaciones regionales que tiene, para después abordar los RRDH, su funcionamiento, características y subdivisión.

El último punto del primer capítulo tratará acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, su formación y características. Además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Ambas son organizaciones regionales que analizan el diferente accionar que tienen los estados, con el fin de manejar los casos presentados en su contra. Tanto la CIDH como la CorteIDH cuentan con información detallada de su operación interna en materia de recepción y tratamiento de casos.

El segundo capítulo consta del análisis comparativo de cada una de las denuncias. En el caso ecuatoriano de Juan Chaparro y Freddy Lappo, que se dio en 1997, existe detención ilegal, daños psicológicos y pérdidas económicas de los involucrados. Los dos fueron acusados en Ecuador y pagaron una condena de más de año y medio en prisión, dictada por el juez duodécimo de lo penal del Guayas.

Posteriormente no se los halló culpables de las acusaciones; razón por la que los involucrados realizaron una demanda ante la CIDH. La detención se da dentro de la presidencia de Fabián Alarcón, la demanda ante la CIDH se da en 1998. Posteriormente el Estado ecuatoriano hace caso omiso ante las recomendaciones que realiza la CIDH, en 2006, por lo que la CIDH decide remitir el caso a la jurisdicción de la CorteIDH.

Por su parte, en el caso Argentino de Juan Bayarri ocurrido en 1991 se dio la detención ilegal, pasó 13 años dentro de prisión, y fue torturado para confesar

crímenes que no cometió. El estado señaló que se encontraron reparaciones en el ámbito interno tras haberlo dejado en libertad. La petición ante la CIDH se dio en 1994.

Argentina, en esta época, se encontraba en un intento de salida de la crisis económica, al mando del presidente Carlos Menem. Ante el caso expuesto, el Estado argentino no adoptó las recomendaciones dadas por la CIDH en 2007; por tal motivo esta decidió remitir el caso ante la jurisdicción de la CorteIDH.

Tanto Ecuador, en 1977, como Argentina, en 1984, ratificaron la Convención Americana, y ambos aceptaron la jurisdicción y la competencia de la CorteIDH en 1984.

En esta investigación, mediante la comparación de casos será posible determinar en qué medida los estados ecuatoriano y argentino se han sometido al RRDH, y este análisis podría ser usado para futuras comparaciones con otros países. Se podrá comprender de mejor manera cómo las relaciones transnacionales afectan la política estatal; ya que, al ser Estados adscritos a este régimen deberían acatar las resoluciones.

Es relevante, tanto en el caso ecuatoriano (Juan Chaparro y Freddy Lappo) como en el argentino (Juan Bayarri), analizar los contextos históricos que vivió cada país en el momento de las violaciones, pues así se obtendrá una perspectiva tanto general como específica de las acciones cometidas y, como consecuencia una mejor interpretación de los hechos.

Dentro de los dos casos seleccionados existen similitudes. En ambos existió detención arbitraria, privación de la libertad y daños morales. Por esta razón, la comparación resulta viable; porque, al ser casos relativamente similares, es posible tener una base pareja bajo la cual desarrollar el análisis.

Finalmente, en las conclusiones se examinará el accionar de los Estados, así como su conducta frente a las recomendaciones dadas por parte de la CIDH y de la CorteIDH, sobre la base de un análisis comparativo entre los casos estudiados, para determinar su similitud o diferencia al momento de poner en práctica los acuerdo pactados dentro del SIDH.

En el marco teórico de la investigación se hará referencia a autores como: Keohane y Nye (2008), quienes permiten la explicación de los regímenes internacionales. Se usará la explicación de Marcel Merle (2000) para la definición de

estados, quien da una descripción específica de la función que desempeñan los mismos a nivel internacional.

Entre de las explicaciones de los regímenes internacionales encontramos varios autores, que ayudan a la comprensión del accionar de los regímenes, tales como: Anaya (2010), Donnelly (1994), Moravcsik (2000), Young (1999), Rubiola (2006), Saavedra (2008). Pero las teorías de Donnelly y Young serán las bases analíticas de la investigación, dado que permiten una mejor comprensión de cada RRDH.

El estudio no abarca el análisis actual de los DH, tales como las últimas críticas a la CIDH, las necesidades económicas del RIDH ni los análisis que se han dado fuera del tiempo–espacio delimitado dentro de la tesis.

Capítulo 1

1. Estados y Regímenes de Derechos Humanos

El sistema internacional está compuesto principalmente por estados y, además, por actores internacionales tales como: ONG`s, sociedad civil, diferentes regímenes internacionales, multinacionales, etcetera, los cuales juegan un papel importante en el desarrollo del mismo.

“Por << actor >> hay que entender toda autoridad, todo organismo, todo grupo e, incluso, en el caso límite, toda persona capaz de << desempeñar una función >> en el campo social, en nuestro caso concreto, en la escena internacional.” (Merle, 2000, p. 341) Por este motivo, en relaciones internacionales se encuentran una gran cantidad de actores que desempeñan una función específica y desarrollan acciones determinadas para la construcción del sistema internacional.

No se trata solo de un actor único y racional, como el realismo muestra al Estado; sino “actores no territoriales, como las corporaciones multinacionales, los movimientos sociales transnacionales y las organizaciones internacionales”(Keohane; Nye, 1988, p. 15).

Para Keohane y Nye, “las interacciones transnacionales de todo tipo promueven cambios de actitudes que pueden tener posibles consecuencias en las políticas estatales.””(Keohane; Nye, 2008, p. 28), estas interacciones transnacionales se dan con alta frecuencia dentro del plano internacional, lo cual permite la creación de diferentes tipos de normas legitimadas, ya sea por los Estados o por los mismos actores no territoriales.

Dentro de los actores no territoriales encontramos a los regímenes internacionales, estos, según Robert Keohane son “un conjunto de mutuas expectativas, normas y regulaciones, planes, energías organizativas (...) que han sido aceptados por un grupo de estados.”(Keohane, 1988, p. 80). Por otro lado, para Stephen Krasner son “principios implícitos o explícitos, normas, reglas y

procedimientos de toma de decisiones alrededor de los cuales las expectativas de los actores convergen en un área dada de relaciones internacionales.”(Hasenclever; Meter; Volker, 2004, p. 9).

Los regímenes internacionales cumplen una función, la de ser creados a partir de las creencias y necesidades de diferentes grupos sociales (o Estados). A estos se adhieren diferentes Estados, ya sea por necesidad, reconocimiento, intereses, y tienen un impacto más o menos substancial en el plano internacional según sean los logros alcanzados. (Merle, 2000; Krasner, 1993)

Este capítulo tiene por finalidad definir, desde una perspectiva teórica, los conceptos de estados y actores fundamentales del sistema internacional; y la relación que tienen con los Regímenes Regionales de Derechos Humanos (RRDH). También se pretende determinar cuáles son las instituciones sustanciales y primordiales de los DH, tales como el RIDH, el cual implica a todos los RRDH. Posteriormente se dará una perspectiva general de los diferentes regímenes a nivel mundial, a fin de comprenderlos como escenarios regionales –continentales- de protección de los DH. Para terminar se enfocará la atención en el RRDH Americano y sus partes integrantes.

Existen relaciones entre los actores internacionales mencionados y los estados, ya que estos, en palabra de Keohane y Nye, son interdependientes; es decir, sus acciones se caracterizan por efectos recíprocos. Este es el caso de los regímenes internacionales, los cuales “pueden ser incorporados a los acuerdos o tratados interestatales, (...) o pueden evolucionar de acuerdos formales propuestos, (...) o pueden estar meramente implícitos, (...) varían no solo en su amplitud, sino también en el grado de adhesión que reciben de los actores más importantes.”(Keohane; Nye, 1988, p. 36).

Los regímenes internacionales son importantes dentro del desarrollo de las relaciones internacionales; ya que, por medio de estos, es posible la vinculación de los estados y de organizaciones internacionales a diferentes áreas temáticas.

“Los regímenes internacionales son factores intermedios entre la estructura de poder de un sistema internacional y la negociación política y económica que se produce dentro del mismo” (Keohane; Nye, 1988, p. 37). Para Keohane y Nye, dentro de la estructura internacional, los estados son las unidades más importantes, debido a sus recursos de poder. Este hecho permite un control del espacio internacional por parte de los estados y reduce, en cierta media, el impacto de los regímenes internacionales. (Keohane; Nye, 1988).

Desde la postura liberal, los regímenes internacionales cumplen una función necesaria, ya que, su creación se da por la confluencia de intereses y bienes comunes, y cumplen funciones que sin cooperación no se las podría lograr. A más de esto, los “regímenes tendrían una influencia significativa en el comportamiento de los Estados, en la medida en la que pudieran generar información simétrica sobre el (in)cumplimiento por parte de los mismos, y con base en esa información, establecer costos de reputación.”(Anaya, 2010, p. 59).

Existen diferentes tipos de regímenes internacionales, que según Keohane y Nye son creados por respuestas políticas integradas en áreas temáticas específicas. Encontramos regímenes internacionales económicos: como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); de alimentos, como el Régimen Alimentario Mundial; de salud, como la Organización Mundial de la Salud (OMS); políticos, como la Internacional de Partidos Liberales; de derechos humanos, como el Régimen Internacional de Derechos Humanos (RIDH), etc.

Sobre los estados y regímenes internacionales existen varias teorías. Por un lado marcan una relación no tan vinculante, sin embargo necesaria, y por otro lado expresan una relación vinculante a la vez que necesaria. Los estados, y los regímenes internacionales necesitan unos de otros por tener nexos de acción que crean relaciones vinculantes. (Keohane; Nye, 1988).

Las diferentes teorías permiten diversas explicaciones acerca de los regímenes internacionales. Y desde estas teorías podemos reconocer la visión realista, liberal, constructivista. Anaya explica la postura que tienen las distintas corrientes teóricas respecto a los DH.

El realismo apunta que la creación de los RRDH se da por medio de los intereses de las potencias; su impacto en los estados es limitado, ya que el cumplimiento de las normas no tiene relación directa en la maximización del poder relativo.

El institucionalismo (liberalismo) explica que los RRDH son una creación de los estados ligado a sus intereses, no tienen impacto a nivel internacional, ya que no generan costos de reputación.

La teoría liberal de las preferencias determina que los RRDH, son creados por intereses e ideas de grupos sociales con mayor representatividad, en un gran número de estados; su impacto es positivo especialmente en democracias consolidadas.

Por último, el constructivismo apela que la causa de la creación de estos regímenes es el activismo de emprendedores de normas, los cuales dinamizan la lógica apropiada en cada contexto y, mientras estos existan se obtendrá un impacto positivo.

La visión liberal será la base teórica de la investigación, ya que permite explicar y responder de mejor manera la pregunta planteada y da una comprensión clara y precisa de los temas a tratar. La visión constructivista se utilizará para comprender el por qué de las adhesiones de los Estados a los diferentes RRDH.

1.1 Estados.

Para el realismo los Estados son los únicos actores racionales que tienen soberanía y el monopolio de la fuerza dentro del plano internacional, lo que permite, en cierta medida, ser los únicos que toman decisiones trascendentales y relacionarse entre ellos sin la necesidad de diferentes actores internacionales. (Keohane, 1988; Merle, 2000).

En cambio desde la perspectiva liberal, los Estados no son los únicos elementos en el plano internacional, a este se suman: múltiples actores, diversos agentes internacionales, crecimiento de instrumentos de política exterior, aumento de la complejidad de las relaciones internacionales, y los actores transnacionales, siendo los últimos portadores de un peso fundamental.

Para Merle “el Estado o los Estados sean actores internacionales no elimina la existencia de actores no estatales (...) además hay que considerar el caso de las organizaciones interestatales e intergubernamentales, creadas y animadas por los estados, las cuales (...) asumen funciones y ejercen una influencia” (Merle, 2000, p. 342), es decir, las relaciones se dan no únicamente entre Estado-Estado, sino entre Estados-Organizaciones Internacionales-Estados, dicha relación da más complejidad y un nivel más alto de desarrollo al plano internacional.

“Los Estados, iguales de derechos, son desiguales de hecho. No solo por su tamaño; (...) por el volumen de su población; (...) sino también por sus recursos, por su nivel de desarrollo, por su capacidad tecnológica, por su grado de dependencia con respecto al mundo exterior; por su situación geográfica y, especialmente, por su capacidad de acceso a las riquezas marítimas; finalmente, por la potencia de su armamento. Únicamente la combinación de todas estas variables permite establecer una jerarquía de la capacidad de acción y de intervención de los Estados a nivel internacional.” (Merle, 2000, p. 346).

Los Estados tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones en el escenario internacional y encontrarse en condiciones de desempeñar una “función mundial”, pero a la vez necesitan de otros Estados, organizaciones internacionales y actores internacionales para poder desempeñar sus funciones que les permitan cierto tipo de reconocimiento; en consecuencia son dependientes e interdependientes en el plano internacional. (Keohane y Nye, 1988).

El accionar que realizan los Estados, en las relaciones internacionales, se lo desempeña mediante “lo que se ha convenido en llamar <<política exterior>>” (Merle, 2000, p. 155), siendo un “instrumento de cooperación y entendimiento entre los países de la comunidad internacional para manifestar, defender y armonizar sus intereses con los del resto de los Estados. (...) es un mecanismo que da voz al posicionamiento de un Estado, respecto de las acciones que otros llevan a cabo.” (Rojas, 2103, p. 1).

1.2 Régimen Internacional de Derechos Humanos (RIDH)

El RIDH es un grupo de instituciones que forman parte de una misma estructura, en esta encontramos “organismos internacionales gubernamentales como: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo de Europa o la Unión Africana” (Anaya, 2010, p. 46), siendo las mismas organizaciones conformadas por estados.

Por otro lado existen un grupo específico de organizaciones no gubernamentales de DH (ONG`s), estas “dedican sus esfuerzos para proteger los derechos humanos y acabar con sus abusos”¹, tales como: Amnistía Internacional, Human Rigth Watch, Centro de Acción de los Derechos Humanos, Centro Simon Wiesenthal, etc., los que están en la capacidad de tomar acciones en contra de los estados cuando consideren que ha existido violaciones de los DH dentro de los mismos.

El RIDH cuenta con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), esta puede considerarse “una representación de la totalidad del Régimen Internacional de Derechos Humanos, en la medida en que intenta establecer unos estándares de

¹ <http://www.humanrights.com/es/voices-for-human-rights/human-rights-organizations/non-governmental.html>, (visitado, 2/02/2014).

comportamiento en ámbitos que han sido cubiertos por un gran número de declaraciones, acuerdos y convenciones, regionales y globales, sobre derechos humanos.”(Brown, 2002, p.7).

A continuación se presentará el por qué de su formación; cuál es su función dentro del sistema internacional, qué características principales tiene y cuáles son sus objetivos en el marco internacional, con el fin de dar un marco teórico y explicativo acerca de su funcionamiento y desempeño dentro del sistema internacional.

1.2.1 ¿Por qué se forma?

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, históricamente los DH adquieren relevancia a nivel internacional denotándose “una concepción mundial de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos”(Hurrell, 1999, p. 278), es decir, se reconoció que todos los derechos son iguales y que en su totalidad forma el conjunto de DH.

La creación y el desarrollo explícito del RIDH se da a partir del ocaso de la Segunda Guerra Mundial, y con la “Declaración Universal de Derechos Humanos (...)”, fue una demanda presentada por los propios países integrantes de la comunidad internacional; esto por el odio generado ante las crueldades de genocidio y xenofobia realizadas por los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Esta demanda no era relativa a un bien material sino “moral”. (Anaya, 2010, p. 58).

El relativo crecimiento del RIDH se da “por la persistente pertinencia de las inquietudes “morales”” (Donnelly, 1994, p. 313), ya que, la existencia histórica de grupos sociales y personas que violan cruelmente los derechos humanos infunden en la población el deseo de rechazo, prohibición y reglamentación mediante “normas internacionales”. En el sistema internacional no se puede hablar de normar con autoridad, ya que cada Estado cuenta con su soberanía y puede como no someterse a decisiones ajenas a su territorio.

1.2.2 Características

“Un régimen internacional refleja la visión colectiva de los estados acerca de un problema y de su solución, así como la voluntad para “consolidar” esa solución” (Donnelly, 1994, p.314); en el caso de los DH esto se da con ciertas diferencias en

contraposición a otro tipo de regímenes, tal como el régimen económico, el cual trae consigo beneficios materiales o políticos.

El RIDH se encuentra regulado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos²; estos convenios juntos son un conjunto de tratados y declaraciones concentrados cada uno en un tema específico, tales como: el genocidio, la discriminación y la tortura, etcétera (Donnelly, 1994).

En conjunto son un régimen de reglamentos e instrucciones puestas en práctica, que se encuentran dentro en la ONU, misma que está conformada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU³ y el Comité de Derechos Humanos, siendo estos los principales órganos de RIDH.

La Consejo es, para Donnelly, el cuerpo más importante del RIDH, porque sirve como foro de negociación de las reglas internacionales. Este en los últimos años ha obtenido unos modestos poderes de control y vigilancia (Donnelly, 1994), tales como “ocuparse de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, así como de promover la coordinación eficaz y la incorporación de los derechos humanos en la actividad general del sistema de las Naciones Unidas”.⁴

El Comité es otro cuerpo principal del RIDH, que “supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes”.⁵

Las prácticas políticas de RIDH a nivel internacional son básicamente la promoción del régimen, compuesto de “normas sustanciales de amplia aceptación”, pero cuya puesta en escena en el plano internacional es limitada, ya que no existe ejecución internacional de las normas. “Esa fuerza normativa y esa debilidad de los procedimientos no es accidental, sino resultado de decisiones políticas consientes” (Donnelly, 1994, p. 310).

El RIDH, al no basarse en un interés material para los estados tiende a disminuir su alcance, por el hecho de que no justifica de manera alguna un beneficio material concreto a nivel interno.

² Resoluciones 217 y 22200 de la ONU. En: <http://www.cinu.mx/onu/documentos/> (visitado: 8/05/2014).

³ Creado el 15 de marzo del 2006 en sustitución a la Comisión de Derechos Humanos.

⁴ http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Chapter_5_sp.pdf (visitado: 25/08/2014).

⁵ Comité de Derechos Humanos, En: <http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/> (visitado: 8/05/2014).

La principal razón por la que el RIDH permanece y se define con un régimen internacional duradero es por que las matanzas brutales que se dieron en el transcurso de la historia “continúan conmoviendo la conciencia de la población mundial e infunden el deseo no sólo de rechazar sus acciones como meramente represibles, sino de prohibirlas mediante normas internacionales autoritarias, claras y públicas”.⁶

A la vez el RIDH es un conjunto de regímenes, ya sean regionales, parciales⁷ u ONG`s. Este grupo de actores rigen su actividad basados en tratados, convenciones, acuerdos, que les permite, en teoría, vigilar, precautelar, dar a conocer si se da un total y completo cumplimiento de los DH por parte de los estados.

Es posible identificar dentro del RIDH, RRDH que permiten la protección de los DH en cada continente; estos se establecieron en África (1981), Europa (1959), América y el Caribe (1959) Asia (1967), Liga Árabe (1945).

El RIDH data de no más de setenta años, esto lo convierte en un régimen relativamente joven y diferente a sus pares, ya que, es un régimen de carácter moral, e implica costos de soberanía a los estados vinculados.

1.2.3 Objetivos

Entre los principales objetivos del RIDH encontramos propagar, difundir, respetar, acatar, obedecer, velar y hacer cumplir con los DH reconocidos internacionalmente entre los estados, además “esta diseñado para alentar a algunos Estados a adoptar políticas que de otra manera no iban a perseguir”(Krasner, 1993, p. 2). Esto permite, en cierta medida, un límite al accionar estatal, por parte del régimen, para de esta manera lograr que se cumplan los tratados y acuerdos firmados y ratificados por los estados.

Dentro del RIDH encontramos las ONG´s con énfasis en los DH. Dichas ONG`s forman parte importante para propagar y hacer respetar los DH. Tal es el caso de Amnistía Internacional, que entre sus objetivos tiene como pilares:

⁶ Ibíd., pág. 313.

⁷ Al hablar de regímenes parciales nos referimos a regímenes monotemáticos, y tenemos ejemplos tales como: Los derechos de los trabajadores, el cual fue desarrollado de manera autónoma, y sus reglas pueden considerarse como elaboraciones y extensiones complementarias afines al RIDH; discriminación racial, el cual recibe comunicados de individuos, realiza intercambio de información, o esta ligado a redes de relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales; tortura, este tiene una significación más fuerte que los anteriores, es sólido y se puede decir que es un régimen declaratorio fuerte; derechos de la mujer, en principio un régimen segregado, pero que se ha venido fortaleciendo a nivel internacional y se ha consolidado y profundizado en el consenso internacional.

“realizar labores de investigación y emprender acciones para impedir y poner fin a los graves abusos contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Trabajamos en favor de individuos y con individuos de todo el mundo a fin de que todas las personas puedan disfrutar de todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Investigamos y actuamos para evitar que se cometan graves abusos contra estos derechos humanos y ponerles fin, para lo cual exigimos que todos los gobiernos y otras entidades poderosas respeten el Estado de derecho.”⁸

Tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, están encargados de la promoción y protección de los DH de los habitantes que viven en su respectivo continente; tomando en cuenta a los países que han ratificado de los convenios y los tratados de los organismos.

El RIDH al ser el conjunto de los RRDH, es en sí una totalidad, es decir, abarca las características y funciones de los diversos RRDH y de los diferentes regímenes parciales, mismos que velan por el cumplimiento de los DH dentro de sus continentes.

1.2.4 Clasificación de los Derechos Humanos.

Dentro de la clasificación de los DH encontramos por una parte los derechos individuales y colectivos y por otra los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La principal, por no decir, la única diferencia esencial entre estos dos grupos de DH es que los individuales y colectivos “varían en función de cada país, según lo expresado por cada constitución.”(Gómez, 2012, p. 1). A nivel internacional los DH se han consensuado en las diferentes declaraciones que se han hecho de los mismos.⁹

1.2.4.1 Derechos Individuales y Colectivos

Por su evolución histórica los derechos individuales y colectivos se encuentran divididos en:

- a) los derechos de primera generación, entre los que constan el “derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual,

⁸ <http://www.amnesty.org/es/who-we-are/about-amnesty-international> (visitada: 22-02-2014).

⁹ Cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos o el de las Convenciones o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la igualdad ante la ley, derecho a la propiedad, etc.”(Gómez, 2010, p. 1)

- b) los derechos de segunda generación, los mismos que recibieron reconocimiento después de la Primera Guerra Mundial y dentro de los que encontramos a los “derechos sociales, como derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, etc.” (Gómez, 2010, p. 1)
- c) los derechos de tercera generación, también llamados derechos colectivos se refieren a los derechos de los pueblos en su totalidad, al ser protegidos ante cualquier ataque a sus intereses o a su identidad como grupo societal; dentro los derechos colectivos que podemos encontrar existen: “el derecho al desarrollo, a la paz, al patrimonio artístico y cultural, a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas y los de los consumidores.” (Grijalva, p. 1)

1.2.4.2 Derechos Políticos, Civiles, Económicos, Sociales y Culturales

Dentro de estos DH existe una separación marcada a nivel internacional. Esta separación se da por la dicotomía entre los derechos cívico-políticos frente a los derechos socio-económicos.

- **Derechos civiles y políticos**

Estos DH son de primera generación, es decir, entran en el marco de las DH individuales. Su origen se remonta hace aproximadamente doscientos años, dándose a lo largo de los años una paulatina construcción y formación de los mismos, se los conocía como “derechos naturales” y “derechos del hombre”.

Entre los derechos civiles encontramos:

- Derecho a la vida y a la integridad física y mental,
- Derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, incluido el derecho a un juicio justo,
- Derecho a la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia,
- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como a

la opinión y expresión.

Entre los derechos políticos encontramos:

- Derecho a la libertad de reunión y asociación,
- Derecho a elegir y a ser elegido, y a participar en los asuntos públicos,
- Derecho a poder demandar a la autoridad pública.

- **Derechos económicos, sociales y culturales**

“Estos Derechos Humanos consisten en los derechos que son de y para la sociedad, se refieren a la existencia de condiciones de vida y de acceso a los bienes materiales y culturales en términos adecuados a la dignidad inherente al ser humano.”(Almirón; Montiel, p.1)

Dentro de los DH garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales¹⁰ encontramos:

- El derecho al trabajo.
- El derecho a la educación.
- Los derechos culturales.
- El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
- El derecho a una vivienda adecuada.
- El derecho a la alimentación.
- El derecho al agua.¹¹

1.3 Regímenes Regionales de Derechos Humanos (RRDH)

Oran Young identifica que los actores internacionales poseen un claro sentido de sus identidades y los intereses que surgen de esas identidades. Por esta razón, los actores se encuentran motivados a crear arreglos institucionales cuando se dan cuenta de que procediendo individualmente genera pérdidas colectivas o la incapacidad de alcanzar ganancias conjuntas. De esta manera, los regímenes son creados por los intereses propios de los actores para resolver o aminorar los problemas de acción colectiva, dando esto, incluso, a una formación de identidades. (Young, 1999).

¹⁰ Dado el 16 de diciembre de 1966.

¹¹ Cfr. Lista de Derechos Humanos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales, extraída de la pagina web de Amnistía Internacional. <http://www.amnesty.org/es/human-rights> (visitado: 26/08/2014).

Por tal motivo, a pesar de la existencia de un RIDH, la creación y existencia de los RRDH se vuelve imprescindible, ya sea por generar identidad dentro de cada continente o por la necesidad de un accionar en conjunto para la generación de ganancias mutuas.

Algunos RRDH cuentan con una serie de elementos estipulados para el control y el respeto de los DH, a más de mecanismos que se operan en el caso de violaciones de DH para de esta manera hacer cumplir las obligaciones internacionales¹² establecidas en cada uno de los regímenes.

Otros RRDH no se encuentran coaccionados por la acción estatal, como explica Andrew Moravcsik, “no están diseñados para regular las políticas de externalidades, (...) sino para mantener la rendición de cuentas de los gobiernos en las actividades internas” (Moravcsik, 2000, p. 218).

Los tratados, acuerdo, convenios, etc., son elaborados por los mismos estados, ya sea por áreas temáticas de mutuo interés, o por demandas que nacen a nivel internacional como es el caso de los DH.

Dentro de los diferentes RRDH a exponerse, encontramos elementos de análisis a tener en cuenta, entre los que están los de Jack Donnelly y Oran Young.

Oran Young los clasifica en cuatro tipos, los cuales son: regulatorios, procedimentales, programáticos y generativos.

Los regímenes regulatorios, son aquéllos que “se centran en la elaboración y promulgación de reglas y normas de conducta, con el propósito de permitir la participación de los actores en la obtención de beneficios o la evasión de pérdidas colectivas (...) los regímenes procedimentales proveen mecanismos que permiten a los actores, alcanzar sus objetivos colectivos, respecto a problemas tratados por un determinado régimen (...) los regímenes programáticos, se forman con el fin alcanzar ciertos objetivos de manera paulatina, ya que no pueden verificarse en un solo momento (...) los regímenes generativos se centran en el desarrollo de prácticas sociales distintivas donde antes no existían.” (Young, 1999, p. 26).

Por su parte Jack Donnelly los clasifica en cuatro categorías: de ejecución, de puesta en práctica de promoción y declaratorios.

“La ejecución implica mecanismos de toma de decisiones internacionales y fuertes formas de monitoreo y vigilancia internacional. La puesta en práctica incluye procedimientos de vigilancia o monitoreo mas moderados, coordinación de las políticas y cierto grado de intercambio de información. La promoción implicaría el intercambio internacional de información, campañas de promoción o asistencia y

¹² Obligaciones internacionales creadas por los mismos Estados dentro de Pactos, Cartas, Convenios a nivel regional o a nivel mundial.

quizás un sistema débil de monitoreo de las guías internacionales. Los declaratorios involucran normas internacionales pero no procesos de toma de decisión internacional.” (Donnelly, 1986, p. 604-605).

Más adelante estos marcos de análisis serán usados para determinar los diferentes niveles de acción que tiene cada uno de los RRDH.

Entre los RRDH que existen están: Consejo de Europa, compuesto por el tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH); Organización de Estados Americanos (OEA), formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH); Organización de la Unión Africana (OUA), constituida por la Comisión Africana de los Derechos Humanos y los Pueblos (CADHP) y la Corte Africana de los Derechos Humanos y los Pueblos (CorteADHP); Liga de Países Árabes, conformada por el Consejo de la Liga Árabe y la Comisión de Derechos Humanos; y la Asociación del Sureste Asiático.

Esta división de RRDH está dada por órganos de acción, mismos que permiten una mejor comprensión y manejo de los DH dentro de su respectivo territorio, en ciertos casos con más fuerza, ya sea por su ejecución, promoción accionar, que en otros, como se verá en las siguientes páginas.

A continuación se expone los diferentes RRDH que se encuentran en las organizaciones antes citadas, presentando el proceso de su formación, los acuerdos y tratados más importantes, dejando a parte a la OEA, en la que encontramos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que se hablará en el punto 1.4.

1.3.1 Consejo de Europa

Dentro del Consejo de Europa, y a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) surge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El Consejo fue creado en 1949, con el objetivo de defender los DH y los principios democráticos en Europa. Sus órganos son: “el Comité de Ministros (instancia decisoria formada por los Ministros de Asuntos Exteriores de sus países miembros), Asamblea Parlamentaria (órgano de deliberación), Congreso de Poderes Locales y Regionales, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Secretario General.”¹³

¹³<http://www.european-council.europa.eu/the-institution?lang=es> (visitado:25/03/ 2014).

Dentro del Consejo de Europa se dio la elaboración de CEDH, tratado internacional que entró en vigor en 1953. Este “prevé la creación de un mecanismo institucionalizado de protección internacional de los DH.”¹⁴

El TEDH fue constituido en 1959, con sede en Estrasburgo. Es tribunal internacional que tiene la competencia para conocer los diferentes tipos de demandas individuales o estatales las que se encuentren fundamentadas en violaciones de derechos civiles y políticos que se encuentren enunciados en el CEDH; donde se establece que los “Estados miembros del Consejo de Europa garanticen los derechos fundamentales, civiles y políticos, no sólo de sus nacionales sino de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.”¹⁵

Además en el TEDH se “examina las reclamaciones individuales y estatales contra uno o varios Estados infractores que hayan asumido las obligaciones del CEDH y de sus protocolos y que se pronuncia sobre las hipotéticas vulneraciones mediante sentencias declarativas y obligatorias” (Rubiola, 2006, p. 3).

Esto abre la posibilidad de que cualquier individuo que vive en Europa o es europeo está en la capacidad de demandar ante el TEDH, además de acuerdo al artículo 34 de la Convención Europea: “El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes,¹⁶ de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho”.¹⁷

Por medio del Convenio de 1950 los Estados Partes son aquellos Estados que aceptaron el derecho al recurso individual. Los demandantes individuales (particulares, grupos de particulares u organizaciones no gubernamentales), se encuentran en la capacidad de presentar ante la Comisión demandas contra los Estados Partes, por considerar vulnerados los derechos garantizados en el Convenio. (Rubiola, 2006).

¹⁴ http://www.echr.coe.int/Documents/court_in_brief_spa.pdf, pág. 1. (visitado:17/02/1014).

¹⁵ *Ibíd.*

¹⁶ Término empleado para designar a los Estados signatarios de los Convenios de Ginebra. Se utiliza este término porque los términos de "Estado" o "gobierno" pueden dar lugar a problemas de reconocimiento jurídico con ocasión de un conflicto armado. En: <http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Terminos&id=738>, (visitado: 26/08/2014).

¹⁷ Convención Europea, Artículo 34, en: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf, (visitado:25/03/2014)

En sus, prácticamente, cincuenta años de creación el TEDH ha dictado más de 10.000 sentencias. Estas sentencias son obligatorias para los estados signatarios y han llevado al cambio y transformación de su legislación y práctica administrativa en gran cantidad de ámbitos. La jurisprudencia del Tribunal ha hecho del Convenio una herramienta dinámica y fuerte para hacer frente a los diferentes desafíos que consolidan el Estado de Derecho y la democracia en Europa. El Tribunal vela por el respeto de los derechos humanos de 800 millones de europeos en los 47 Estados miembros del Consejo de Europa¹⁸ que han ratificado el Convenio.¹⁹

- **Tribunal Europeo de Derechos Humanos.**

“El Tribunal se divide en cinco secciones de nueve jueces cada una en las que debe haber una composición equilibrada desde un punto de vista tanto geográfico como de representación de sexos, teniendo en cuenta los diferentes sistemas jurídicos existentes en los Estados Partes. (...) El funcionamiento habitual se realiza a través de las cinco secciones encabezadas por el Presidente del Tribunal. Dentro de las secciones, los asuntos son examinados, en cuanto a la admisibilidad y el fondo, por una de las cinco Salas de siete jueces, quedando los restantes como sustitutos de los jueces.”(Rubiola, 2006, p. 6).

El TEDH cuenta para su funcionamiento con cuatro fases, dentro de estas es posible llegar a un acuerdo entre las partes o al dictamen de la sentencia. En estas fases se dan: la admisibilidad de la demanda, en la que se presenta la vulneración de uno o más DH; posteriormente se da un intento de arreglo amistoso por parte de las partes involucradas; si este arreglo no llega a darse se procede a la “sentencia sobre el fondo”, en la que se redacta y se pronuncia una sentencia; finalmente dentro del tribunal se da “el examen de las condiciones de admisibilidad de la demanda” en el que el Tribunal “garantiza la existencia de mecanismos internos efectivos que garanticen la protección de los derechos humanos.” (Rubiola, 2006, p. 9).

Podemos observar que el Régimen Europeo, dentro de los planteamientos de Donnelly es un régimen de ejecución; ya que, cuenta con instrumentos normativos, y con organismos especializados en DH; promocional al estar integrado por la Convención Europea y varios protocolos de protección de derechos, los mismos que avalan el ejercicio y goce de los derechos en la región y promocionan su desempeño;

¹⁸ Véase Anexo 1.

¹⁹ Cfr. http://www.echr.coe.int/Documents/court_in_brief_spa.pdf, (visitado:19/02/2014).

y de puesta en práctica alta; por que ha desarrollado procedimientos y estándares para la protección de los DH.

Según los planteamientos de Young el régimen europeo se enmarcaría en las categoría de regulatorio y procedimental. Regulatorio a razón de que está compuesto por órganos políticos, de protección de derechos y otros instrumentos de integración regional, estos están en la capacidad de elaborar normas en el marco de los DH y a la vez controlan el cumplimiento de los mismos en la región. Procedimental ya que tiene procesos para tomar decisiones altamente desarrollados y estas decisiones son cumplidas por parte de los Estados del Consejo de Europa.

Cabe destacar que no todo dentro del régimen europeo está totalmente consolidado. Existen derechos que no se encuentran dentro de la Convención Europea, y otros que se los podría tomar como discriminatorios. A pesar de la existencia de reclamaciones individuales, estas se pueden dar solo de parte de individuos pertenecientes a los Estados Partes. En el caso de derechos que no se encuentran dentro de la Convención está el derechos a los migrantes, ya que el Consejo de Europa vela por los ciudadanos pertenecientes a los estados miembros. Por otro lado un ejemplo de derecho que, por ciertos grupos sociales, puede considerarse discriminatoria es el derecho a contraer matrimonio, en el cual dice que solo mujer y hombre puede contraer matrimonio.

Estos ejemplos permiten apreciar que a pesar de que el régimen europeo es altamente desarrollado, necesita una mayor preocupación en ciertas temáticas.

1.3.2 Organización de la Unión Africana (OUA)

“El Sistema Africano de los Derechos Humanos y de los pueblos se basa en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981²⁰, documento único que reúne tanto derechos individuales y colectivos” (Saavedra, 2008, p. 671), acordado en la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la actual Unión Africana²¹.

La integración regional en el África poscolonial inició en 1963, por medio de la aprobación de la Carta de la Organización para la Unidad Africana, dando inicio a la formación de las comunidades económicas subregionales. El principal objetivo de

²⁰ Esto tomando en cuenta que el proceso de descolonización de los estados africanos se da en los 70.

²¹ Por entonces llamada Organización de la Unidad Africana.

la cooperación fue la búsqueda del desarrollo económico de los Estados miembros. La Carta Africana reconoce la universalidad de los Derechos Humanos e intenta reafirmar y mantener las tradiciones culturales de los pueblos africanos, mismos que podrían estar en riesgo frente a la “civilización occidental”.(Saavedra, 2008, p. 675).

A continuación se expondrá los diferentes órganos que componen el Sistema Africano de Derechos Humanos, los cuales son: la Comisión y la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.

- **La Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.**

La Comisión fue establecida el 21 de octubre de 1986²², este es el único órgano contemplado por la Carta para la promoción y protección de los DH dentro del continente, su sede se encuentra en Banjul, Gambia.

Las funciones de la Comisión son “recolectar documentos, llevar a cabo estudios e investigaciones sobre los problemas en Derechos Humanos en el continente africano. (...) También está facultada para formular principios y reglas que tengan como objetivo solución de problemáticas relativas a la solución de los derechos humanos y de los pueblos en África” (Saavedra, 2008, p. 684-685).

La promoción de los DH que realiza la Comisión dentro del continente no es conflictiva. Gran parte es en materia de investigación, se encarga de estudiar los informes que los Estados²³ presentan cada dos años en materia de medidas legislativas, administrativas o políticas públicas para dar cumplimiento a los derechos y libertades, los informes estatales son publicado en su página web,²⁴ pero no se realizan informes por parte de la Comisión acerca de la situación de cada estado miembro.

La Comisión tiene entre sus funciones la de información y promoción sobre los DH, y para realizar esto desarrolla estudios, programas y proyectos. Otra de sus funciones es receptar quejas por parte de individuos o de otros estados. A partir de esto la Comisión debe usar los recursos necesarios para que las controversias sean resueltas amigablemente; si esto no se da, la Comisión se encuentra en la facultad de realizar informes de los hechos y sus respectivas recomendaciones.

²² Posterior a la adopción de la Carta Africana.

²³ Estados miembros, véase anexo 2.

²⁴ <http://www.achpr.org/>, (visitado: (26/98/2014)).

- **La Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos**

A diferencia de la Comisión, la Corte es un esfuerzo de órgano judicial dentro de la Unión Africana, en pro del respeto y protección de los DH. Fue creada “mediante el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (...), adoptada en 1998 y en vigor desde el 25 de enero del 2004.” (Harrington, 2004, p. 308).

La Corte busca que los DH sean completamente exigibles dentro del territorio, por tal motivo, a más de rasgos propios, toma características relevantes de los órganos de protección de DH Europeo y Americano. Actualmente se desconoce en gran medida la labor realizada por la Corte; ya que, emite informes anuales, los que en su gran mayoría no son tomados en cuenta. Únicamente cuentan con descripciones administrativas. (Saavedra, 2008, p. 704).

La Corte hace referencia a la excesiva dependencia de la misma con la Comisión, debido a que esta no le autoriza tomar decisiones para resolver los casos remitidos por la gran cantidad de trabas burocráticas existentes, además de la falta de una sede permanente, sin permitirle un trabajo continuo.²⁵

El régimen africano, dentro de los planteamientos de Donnelly, (Donnelly, 1968) podría clasificarse como un régimen netamente declarativo y a la vez promocional de los DH dentro de su territorio. Es declarativo; por que, consta de instrumentos regionales de DH que reconocen y garantizan lo normativo, la promoción y protección de los derechos a sus habitantes, aunque aun no ha desarrollado los mecanismos y procedimientos necesarios para hacerlos totalmente eficaces. También, es promocional porque crea dentro del régimen campañas de promoción e información sobre los derechos desde la Comisión Africana hacia los Estados.

Dentro de la clasificación de Young, el régimen se consideraría como regulatorio y programático. Regulatorio, ya que ha avanzado y creado instrumentos de naturaleza normativa sobre temáticas de DH, pero en menor grado que regímenes como el europeo o americano. Programático, al ofrecer mecanismos de cumplimiento y control de las recomendaciones y obligaciones estatales, pero en un nivel de cumplimiento de los estados limitado.

²⁵ Cfr. Corte Africana de Derechos Humanos, en: <http://www.african-court.org/en/index.php/2012-03-04-06-07-42/activity-reports>, (visitado:12-05-2014).

1.3.3 Liga de países Árabes²⁶

El régimen árabe nace en el marco de la Liga Árabe en 1945, tiene como instrumento constitutivo la Carta Árabe de Derechos Humanos, adoptada en 1994, entrando en vigor el 15 de marzo de 2008, 60 días después de la ratificación de los Emiratos Árabes Unidos. Este instrumento:

“Llama a los países árabes a asegurar a todo individuo, que se encuentra en su territorio o que obedece a sus jurisdicciones, todos los derechos y todas las libertades proclamadas a dicha Carta, sin ninguna distinción de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión o ideología. Reafirma especialmente el derechos de todos los pueblos árabes a disponer de sus riquezas y sus recursos y a rechazar toda forma de racismo o dominación extranjera.”²⁷

A continuación se expondrá los diferentes órganos que componen el Régimen Árabe: el Consejo de la Liga Árabe y la Comisión de Derechos Humanos.

- **Consejo de la Liga Árabe**

El Consejo es la autoridad suprema en la Liga de Países Árabe, se encuentra compuesto por representantes de los estados miembros. Su función es “poner en práctica los objetivos de la Liga y ejecutar los planes y programas establecidos por los estados miembros. También adopta medidas en caso de disputas entre estados miembros o un estado miembro y un tercero.”(Boutros-Boutros, 1984, p. 750).

- **La Comisión de Derechos Humanos**

Los trabajos que realiza la Comisión son vistos como proyectos y acuerdos. Sus objetivos son: apelar a los principios humanitarios y al derecho internacional con la finalidad de incrementar el interés en la causa árabe. Entre los pocos temas en que se ha centrado la Comisión encontramos: “derechos de los combatientes en caso de guerra o conflicto armado, la legitimidad de la lucha librada por la resistencia palestina, la protección de los lugares sagrados y excavaciones arqueológicas” (Boutros-Boutros, 1984, p. 750), dejando de lado la discusión de otros DH.

El régimen árabe, dentro de la clasificación de Donnelly, (Donnelly, 1968) podría ser considerado como un régimen declarativo y promocional. Declarativo, al

²⁶ Países que conforman la Liga Árabe, véase anexo 3.

²⁷ <http://unmultimedia.org/radio/spanish/detail/109620.html>, (visitado:27/02/2014).

contener pocos instrumentos regionales de DH²⁸, y con un nivel de implementación bajo. Es un régimen promocional a razón de generar información y promoción ya que genera campañas sobre los DH.²⁹

Conforme con la categorización de Young, el régimen podría considerarse regulatorio y programático. Regulatorio pero a un nivel bajo, por no constar con una gran cantidad de instrumentos específicos sobre DH, salvo la Carta Árabe. Es programático, ya que por medio de Consejo de la Liga Árabe y la Comisión de DH, se crean programas y proyectos sobre promoción de DH, aunque estas prácticas no se encuentran institucionalizadas.

Boutros- Boutros-Ghali a pedido que: la Comisión Árabe permanente sobre DH, no solo concentre sus esfuerzos en el problema de los DH en los territorios ocupados, sino también en el problema de los DH en el territorio de los estados miembros. (Boutros-Boutros, 1984).

1.3.4 Régimen del Sureste Asiático.

El régimen del Sureste Asiático fue conformado en el marco de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en 1967. Es una régimen integrado en materia económica con el objetivo de fomentar la paz, el crecimiento económico y la estabilidad regional. Lamentablemente no contempla la protección de los DH dentro de sus principales objetivos.

Los miembros de la ASEAN han ratificado la Carta de la Asociación en la que existen pocas disposiciones en relación a las DH, entre ellas se encuentra el mandato para la creación de un órgano de DH llamado: “Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos del ASEAN, (AICHR), por sus siglas en ingles”.

En el 2009 los miembros de la ASEAN deciden crear un órgano de DH para la región, llamado AICHR. Dentro del mismo los líderes prometen brindar apoyo total al

²⁸ Tales como organismos subsidiarios del Consejo: El Comité de Mujeres Árabes, el Comité de Derechos Humanos, el Comité Cultural, el Comité de la Salud y la Organización para el Bienestar de la Juventud.

²⁹ Véase <http://www.arableagueonline.org/>, donde se denuncian los conflictos en Siria y Gaza y se promocionan campañas de concientización de DH.

nuevo órgano y destacan su compromiso para la cooperación, promoción y protección los DH en la región³⁰.

La Comisión fue el fruto de la labor de muchos años, en los que participaron los ministros de relaciones exteriores de los países miembros. La misma carece de la capacidad de mandato y de imposición de sanciones a los estados, ya que no se encuentra completamente desarrollada y se han dado desde su creación únicamente dos reuniones generales³¹ para su expansión y crecimiento.

Básicamente la función de este órgano de DH es la investigación y la promoción de los DH por medio de reuniones y actividades desempeñadas dentro del organismo.³² No se da un desarrollo sustentable de protección total de los DH por el hecho de que los países que la conforman tienen como área prioritaria aliviar la pobreza y las disparidades socio-económicas³³, centrándose más en la protección de los derechos económicos y sociales.

El régimen asiático puede clasificarse, según las definiciones de Donnelly, (Donnelly, 1968) como simple y meramente declarativo. Al ser un régimen nuevo, no cuenta con tratados o convenciones constitutivas en materia de DH; ya que, nace como un régimen político-económico. Según la clasificación de Young, tomando en cuenta su corta vigencia, podría ser considerado como un régimen generativo, porque se está creando prácticas sociales distintas e intentando desarrollar los DH donde antes no se los tomaba en cuenta.

1.3.5 Organización de Estados Americanos (OEA)

El origen de la OEA se remota a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington D.C., entre octubre de 1889 y abril de 1890. En dicha Conferencia se creó una Oficina de las Repúblicas Americanas, convertida en 1910 en la Unión Panamericana. A lo largo de medio siglo en la Unión Panamericana,

³⁰ Cfr. AICHR. ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights, en: <http://aichr.org/press-release/aichr-representatives-met-for-the-first-time-with-the-asean-commission-on-the-promotion-and-protection-of-the-rights-of-women-and-children/>, (visitado: 09/05/2014).

³¹ Primera reunión general dada el 28 de abril del 2014. Segunda reunión general para revisar temas referentes a la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos, dada del 27 al 29 de junio del 2014 en Tailandia. En: <http://aichr.org/report/second-regional-consultation-on-the-contribution-to-the-review-of-the-terms-of-reference-of-the-aichr-and-the-special-meeting-of-the-aichr/>, (visitado: 26/08/2014).

³² Véase: <http://aichr.org/category/activities/>, (visitado: 26/08/2014).

³³ http://www.aseanfoundation.org/index2.php?main=priorities_area.htm, (visitado: 09/05/2014).

se establecieron convenciones y acuerdos jurídicos, que apoyaron en la colaboración económica, social y cultural interamericana. Dicha colaboración dio paso a la creación de diversos organismos especializados.

Entre estos organismos encontramos a la Organización Panamericana de la Salud (1902), el Instituto Interamericano del Niño (1916), la Comisión Interamericana de la Mujer (1928) y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (1928). (Diez de Velasco, 1997).

Luego de la Gran Depresión de 1929 y de la Segunda Guerra Mundial se da un fortalecimiento en la cooperación entre los estados miembros y acuerdos generales a favor de una más decidida respuesta multilateral frente a las amenazas a la paz y la seguridad de las Américas (Diez de Velasco, 1997), dando lugar a la creación de la OEA en 1948 en Bogotá, Colombia. Su Carta constitutiva entró en vigencia en diciembre de 1951. El principal objetivo era lograr orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la soberanía, integridad territorial e independencia en los países del continente.³⁴

Dentro de la OEA el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es el órgano de protección de los DH en el que se encuentran: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La CIDH y la CorteIDH dentro de la región tienen la función de proteger a los individuos que reclaman la violación de sus derechos por parte de los diferentes estados miembros de la OEA, mismos que por medios de sus cortes nacionales no han ejecutado a cabalidad el cumplimiento de estos.

A continuación se realizará primeramente: una breve reseña histórica del SIDH, luego se profundizará en la formación y las características del mismo, y finalmente se hará una caracterización, ordenamiento del accionar y tratamiento de denuncias receptadas de parte de la CIDH y la Corte.

1.4 Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)

El SIDH, creado en 1948, “es un escenario regional constituido por los Estados que integran la Organización de Estados Americanos, cuya principal función

³⁴ Cfr. Organización de Estados Americanos. Quienes somos, en: http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp, (visitado: 09/05/2014).

es velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el continente americano.”³⁵

La creación del SIDH se da por parte de las “democracias del hemisferio”, las que, según Grossman, se dedicaron a identificar derechos internacionales y a establecer instancias supranacionales de supervisión para el respeto y promoción de los DH. (Grossman, 1994).

Grossman señala cuatro instancias dentro de las cuales se da la creación y el desarrollo del SIDH. En primer lugar, la existencia de normas internacionales que permite que se legitimen y que puedan trascender fronteras dentro de un sistema democrático.

En segundo lugar la existencia de un sistema interamericano (Grossman, 1994) de DH logra dos objetivos: primero, evita el deterioro de democracias permitiendo la intervención de los países de la OEA antes de que exista polarizaciones dentro de un territorio, evitando de esta manera el uso de la fuerza, permitiendo la ayuda necesaria y eficaz, siendo, en casos extremos, tales como la dictadura argentina,³⁶ un organismo fuerte en la lucha a favor de los DH; y segundo, un sistema internacional de protección posibilita al perfeccionamiento de las democracias, ampliando los espacios de libertad existentes.

En tercer término, el desarrollo de un Sistema Interamericano de DH tiene la ventaja de que se encuentra en sincronía con el principio de no intervención pactado dentro de la carta de la OEA. La no existencia de contradicciones dentro de sus normas y procedimientos internacionales se puede ver en la Carta de la OEA artículo 3 literal “e”³⁷, mismo que se encuentra delimitado de la misma forma dentro de los fines de la CIDH³⁸. En este caso, la SIDH, a pesar del principio de no intervención, se encuentra en la capacidad de hacer cumplir las normas internacionales pactadas,

³⁵ ALVEAR, José. Que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos., en: <http://colectivodeabogados.org/Que-es-el-Sistema-Interamericano>, (Visitado: 15/08/2013).

³⁶ Véase Navarro y Palermo, 2003.

³⁷ Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. En: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm#ch2, (visitado: 27/08/2014).

³⁸ Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. En: <http://www.cidh.org/Basicos/Introduccion.htm>, (visitado: 27/08/2014).

firmadas y ratificadas por los estados, aunque esto amerite la intervención dentro del país y hacia las personas causante de los crímenes contra los DH.³⁹

Finalmente, la existencia de normas y procedimientos jurídicos, permite que la aplicación de las normas de DH no sean meramente políticas. En cambio la supervisión es meramente política, y por eso existe el riesgo de sesgos en su aplicación. (Grossman, 1994).

El SIDH, desde su creación, buscó el “reconocimiento de ciertos derechos y libertades especiales para sus habitantes” (Grossman, 1994, p. 247), pero no fue totalmente posible hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1948 en Bogotá, los estados miembros de la OEA adoptaron la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADH)⁴⁰.

Éste fue el primer instrumento de protección y promoción de DH, aprobado incluso antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. La DADH mostró un deseo moral, aunque no era un instrumento vinculante y tampoco contenía obligaciones concretas. Estaba constituida de expectativas sociales y de la obligación de respetar los derechos de los individuos por parte de los gobiernos. (Grossman, 1994).

La DADH reconoce que todos los hombres tiene derecho a la “vida, libertad, seguridad, integridad, igualdad ante la ley, libertad religiosa y de culto, educación, justicia, nacionalidad, reunión, asociación, propiedad”⁴¹, entre otros. El ser una declaración, no la convierte en un instrumento vinculante y obligatorio para los países, por eso es interpretada como un “compromiso legal indirecto para los miembros de la OEA”. (Melish, 2003, p. 11).

Del 7 al 22 de noviembre de 1969, 21 años después de la DADH, se celebra y se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, vigente desde 1978. La aprobación de la convención se da a razón de: “Reafirmar su propósito de consolidar este Continente (...) y de incorporar a la propia Carta de la Organización normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales”⁴². La misma establece que “Los estados partes de la Convención se

³⁹ Véase WEHR, Ingrid. Soberanía Estatal vs Justicia Universal. El caso Pinochet y la discusión sobre la extraterritorialidad de la ley. (2000).

⁴⁰ Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp>, (visitado: 18/06/2014).

⁴¹ <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp>, (visitado: 20/03/2014).

⁴² en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.html, (visitado: 18/06/2014).

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones públicas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (...) a más de la protección de los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos”(Nikken, 2003, p. 661-665).

La convención establece esencialmente deberes para los estados, especialmente en lo que se refiere al respeto y garantía de los DH (Nikken, 2003), ya que a más de la existencia de un derecho interno donde actos en contra de los DH sean penados, existe la responsabilidad internacional, de los Estados.

Los estados ratificantes de la convención son: “**Argentina**, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, **Ecuador**, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.”

“Por su parte encontramos a Estados Unidos que es únicamente signatario de la Convención pero no la ha ratificado. Canadá, Antigua y Barbuda, Belice, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Cuba y las Granadinas no son signatarios, por lo tanto no forman parte del SIDH”⁴³

Tanto la DADH como la Convención Americana forman parte de integral de la SIDH, involucran un marco de acción, ya que establecen su “estructura básica, órganos, propósitos, alcance de protección y normas de expansión” (Melish, 2003, p. 8).

1.4.1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH, creada en 1959, previo al pacto de San José, busca internacionalizar la protección de los DDHH en los Estados miembros. Es la primera instancia de reclamación a nivel internacional en el continente, en función a los estados firmantes y ratificantes, por parte de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales, respecto a las obligaciones que tienen los Estados miembros en relación a los DDHH. Los principales objetivos son: promover y observar los DH, dentro de cada país

⁴³ http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm, (visitado:20/03/2014).

miembro, recibir, analizar e investigar peticiones individuales que alegan violaciones de DH dentro de los Estados.⁴⁴

A pesar de que la CIDH fue creada en 1959, esta no empezó sus actividades sino hasta 1969;⁴⁵ cuando se celebró el pacto de San José. A partir de esta fecha la CIDH viene “investigando las denuncias que le son presentadas, cumpliendo con audiencias públicas, haciendo visitas *in loco*⁴⁶ y de otras naturalezas, de las cuales resultan informes con recomendaciones a los Estados miembros de la OEA.” (Bicudo, 2003, p. 229).

La CIDH “está integrada por siete miembros independientes, elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización, de alta actitud moral y de reconocida trayectoria en DH, los cuales tomarán las decisiones por mayoría absoluta de votos.”⁴⁷

De acuerdo con el artículo 41 de la Convención Americana, “tiene la función genérica de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.”⁴⁸ Para Donnelly, la CIDH es el corazón de los procedimientos del RIDH; ya que, “tiene la facultad de despertar la conciencia acerca de los derechos humanos, hacer recomendaciones a los gobiernos, responder a las indagaciones de los estados, preparar estudios e informes, solicitar información de los gobiernos y aconsejarlos, efectuar investigación en el lugar de los hechos” (Donnelly, 1994, p. 318), a más de atender a consultas que realicen los Estados miembros y rendir un informe anual a la Asamblea General de la OEA.

Además, los estados firmantes de la Convención Americana deben sujetarse a los términos de la CIDH, que con el protocolo de Buenos Aires, a partir de 1967, realizó una reforma a la carta de la OEA⁴⁹, y obtuvo una mayor legitimidad en torno a

⁴⁴ Cfr. <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/funciones.asp>, (visitado: 18/06/2014).

⁴⁵ Tras la creación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

⁴⁶ Constituyen el método más utilizado por los organismos internacionales (...) para observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos. Debido a su naturaleza, tiene aspectos políticos que generan ciertas dificultades para su realización, razón por lo que los Estados no siempre están dispuestos a aceptar la intervención de organismos internacionales, la que según ellos podría afectar su soberanía, en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2454/40.pdf>, (visitado: 24/03/2014).

⁴⁷ <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/24.estatuto%20comision.pdf>, (visitado: 24/03/2014).

⁴⁸ Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Artículo 41, en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp>, (visitado: 20/04/2014).

⁴⁹ Para Miguel A. Vasco, la razón de la reforma a la carta se da porque la OEA requiere gravitar al ritmo de los tiempos. El Protocolo de Buenos Aires introdujo reformas estructurales y creó nuevas instancias deliberativas acorde con los contextos sociales que vivía el continente. En: <http://www.elcomercio.com/opinion/reformas-a-oea.html> (visitado: 27/08/2014). Entre estas reformas encontramos la creación de la Asamblea General de la OEA, la que debe ser convocada ordinariamente cada año. Además se da mayor realce a la CIDH, ya que el artículo 112 del Protocolo dice que: habrá

sus poderes frente a los estados; en esta reforma pasó a ser un órgano principal de la OEA. (Grossman, 1994, p. 249).

La CIDH es un órgano de supervisión “semijudicial, (...) implica la utilización de técnicas de carácter judicial (...) sin embargo los resultados de su trabajo pueden ser sometidos a órganos de carácter político: la Asamblea General o el Consejo Permanente de la OEA” (Grossman, 1994, p. 250). La CIDH no está en la capacidad legal de someter a los estados ante sus informes o recomendaciones y obligar a que estos los cumplan a cabalidad, sin embargo, el efecto de los informes afecta la imagen de los países tanto internamente como a nivel internacional.

▪ **Recepción y tratamiento de denuncias.**

Cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA, puede interponer ante la CIDH peticiones que tengan denuncias o quejas de violación de los DH por un Estado parte.⁵⁰

Para que una petición o comunicación sea admitida por la CIDH, se requerirá que: se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el afectado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva, que no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y que la petición contenga el nombre, nacionalidad, profesión, domicilio y firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.⁵¹

La CIDH, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos, procederá en los siguientes términos: si reconoce la admisibilidad de la petición solicitará informaciones al Gobierno del Estado responsable de la violación. Las informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable y establecido. Recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas se verificará si existen o subsisten los motivos de la

una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.

⁵⁰ Cfr. Convención Americana de Derechos Humanos. Art. 44.

⁵¹ Cfr. Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 46.

petición o comunicación, podrá pedir cualquier información pertinente y recibirá, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados.⁵²

Dentro de la CIDH se alienta a una solución amistosa misma que es admisible y deseable dentro de dicho órgano, el reglamento de la mismo intenta dar paso a esta solución estipulando que “el asunto por su naturaleza sea susceptible de solucionarse mediante la utilización del procedimiento de solución amistosa.” (García, 2003, p. 133).

La solución amistosa, para Sergio García, no se trata de “cualquier” solución, sino de una solución justa entre las partes involucradas, esta a su vez tiene una función “cuasi jurisdiccional, ya que a través de los casos presentados, hace recomendaciones a los estados miembros, teniendo en perspectiva la reparación de la violación cometida.” (Bicudo, 2003, p. 230).

Dentro del procedimiento para la presentación de casos ante la CIDH encontramos:

De no llegarse a una solución, la CIDH redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones; el informe será transmitido a los Estados interesados; al transmitir el informe, la CIDH puede formular proposiciones y recomendaciones.⁵³

Si en el plazo de tres meses posteriores a la remisión de informe de la CIDH a los Estados interesados el asunto no ha sido solucionado, o sometido a la decisión de la CorteIDH por la CIDH o por el Estado interesado, la CIDH podrá emitir su opinión y conclusiones sobre la cuestión; la CIDH hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación.⁵⁴

En las medidas cautelares⁵⁵ expuestas en el artículo 25 del reglamento de la CIDH⁵⁶ encontramos que se las debe tomar en situación de urgencia; la CIDH podrá

⁵² Cfr. Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 48.

⁵³ Cfr. Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 50.

⁵⁴ Cfr. Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 51.

⁵⁵ Son aquellas que pretenden asegurar la sujeción del imputado al proceso y, en su caso, la presencia del presunto autor del hecho ante el órgano jurisdiccional, ya sea para garantizar su declaración ante el Juez Instructor, o para evitar su inasistencia y consecuente frustración de la celebración del juicio oral ante el Juzgador, en: http://noticias.juridicas.com/articulos/65-Derecho-Procesal-Penal/199904-eaj36_07.html, (visitado: 27/08/2014).

⁵⁶ Medidas cautelares aprobadas en el 2000 y modificadas hasta julio del 2008, usadas en los casos a analizarse. A partir de julio del 2008 se da un cambio en las medidas cautelares, mas no se toman en cuenta ya que no corresponden al tiempo en el que se dieron los casos a estudiarse.

solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas con una petición o caso pendiente; y a fin de prevenir daños irreparables a persona que se encuentren bajo la jurisdicción de éste, estas podrán ser de naturaleza colectiva.

Las medidas cautelares son importantes para el estudio, permiten marcar la diferencia entre los casos a analizarse, y marcar el punto de inflexión dentro del cual la teoría fue sustituida por las prácticas perpetradas en cada uno de los casos.

La CIDH al momento de solicitar a un Estado la adopción de medidas cautelares tendrá en cuenta la gravedad y urgencia de la situación; si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes; si es individual o grupal.

Las medidas cautelares antes de ser conferidas serán verificadas con información de parte del Estado, y posteriormente serán evaluadas con periodicidad con la finalidad de mantenerlas vigentes.

Además el Estado podrá presentar una petición a fin de que la CIDH deje sin efecto la solicitud de adopción de medidas cautelares. La CIDH solicitará observaciones a los beneficiarios o sus representantes antes de decidir sobre la petición del estado. La presentación de dicha petición no suspenderá la vigencia de las medidas cautelares otorgadas.

La CIDH podrá requerir información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares. El incumplimiento sustancial de los beneficiarios o sus representantes con estos requerimientos, podrá ser considerado como causal para que la CIDH deje sin efecto la solicitud al Estado de adoptar medidas cautelares.

El otorgamiento de esas medidas y su adopción por el Estado no constituirá prejuzgamiento sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.⁵⁷

Los informes elaborados por la CIDH son “interpretaciones válidas de obligaciones libremente adquiridas por los Estados. Si un Estado no concuerda con dichas interpretaciones tiene la libertad para recurrir a la Corte Interamericana disputando las conclusiones y procedimientos de la Comisión.” (Bicudo, 2003, p. 223). El que la CIDH, dentro de sus informes “recomiende” al Estado las acciones

⁵⁷ Cfr. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 25, Vigente hasta julio del 2008. Aplicado en los casos a analizarse.

que debe tomar, no acredita que los Estados cumplan con las mismas, ya que la CIDH tiene carácter facultativo en torno a sus recomendaciones.

Al pasar el informe de la CIDH a la CorteIDH, la CIDH pide que sus recomendaciones sean tomando en cuenta al momento de dictar una sentencia a favor o en contra de los Estados.

La CIDH es el único órgano, si hubiera la necesidad de hacerlo, que se encuentra en la facultad de remitir los casos a la Corte.

1.4.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos

El segundo órgano de protección es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH o Corte). Es una institución judicial autónoma. Cumple dos funciones: la contenciosa, emitiendo fallos regionales vinculantes para los estados declarados responsables de violaciones de DH, y la consultiva, respondiendo preguntas que formulan los estados miembros de la OEA.⁵⁸

“La Corte, cuyo funcionamiento inició en 1979, a su vez procesa y juzga los casos que le son presentados por la CIDH en contra de los Estados, casos de Estados en contra de Estados y responde a solicitudes de opinión consultivas, para fijar puntos interpretativos de la Convención, o bien así para fijar la jurisprudencia en las diferentes situaciones jurídicas” (Bicudo, 2003, p. 230).

Su organización y composición, según el artículo 52 de la Convención Americana, dice que: “se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos.”⁵⁹

Dentro de los planteamientos de la Corte, esta no estipula el sometimiento de sus decisiones a lo que anteriormente haya recomendado la CIDH, al contrario, esta se encuentra en la capacidad de sentenciar libremente y dentro de su propia apreciación.

De acuerdo a las funciones de Corte, la contenciosa establece que la Corte está facultada para decidir “sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención (...) la Corte ejerce una jurisdicción plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso. Ella es competente, por consiguiente para decidir si se

⁵⁸ Cfr. <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/historia-de-la-corteidh>, (visitado: 18/06/2014).

⁵⁹ http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm, (visitado: 24/03/2014).

ha producido una violación a alguno de los derechos y libertades reconocidos por la Convención” (Márquez, 1994, p. 313).

Además la función contenciosa de la Corte se da por medio de un reconocimiento de la misma, “en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial”⁶⁰. Los Estados que han reconocido dicha función contenciosa son: **Argentina**, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, **Ecuador**, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay, Venezuela.

La función consultiva de la Corte estipula que está en capacidad de emitir diferentes interpretaciones y que las opiniones consultivas “no tiene el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa.” (Pacheco, 2003, p. 72).

La función consultiva de la Corte busca asesorar y ayudar a los estados miembros de la OEA para un cabal y efectivo cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

▪ **Tratamiento de los casos**

Como se dijo antes, la única entidad que se encuentra en la capacidad de enviar casos a la Corte es la CIDH, esto después de que las recomendaciones dadas por la CIDH no hayan sido acatadas por los Estados.

La Corte tiene la facultad contenciosa ante los casos receptados por la CIDH y remitidos a esta. Las sentencias de fondo de la Corte Interamericana oscilan entre: las declaraciones de las violaciones cometidas, y la misma declaración incluidos el agregado de los efectos jurídicos de la violación (García, 2003), ya sean estos efectos declaratorios, condenatorios o mixtos, dentro del primero y segundo períodos de procedimientos que realiza la Corte, de los tres existentes.

Estos dos períodos se los puede ver como un conjunto, ya que varía el relación a las acciones cometidas (primer período), siendo las acciones preliminares una factor

⁶⁰ http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm (visitado: 24/03/2014).

importante; y al conflicto sustantivo (segundo período), el cual concluye con la sentencia de fondo. (García, 2003, p. 89).

El tercer periodo de procedimiento se centra en la reparación de las violaciones cometidas hacia la víctima o sujeto lesionado, por medio de indemnización a causa de daños y perjuicios; además hay otro tipo de reparaciones las cuales consisten en: “reponer, restituir, bienes que exceden al lesionado inmediato (...) y corresponden a la sociedad en su conjunto” (García, 2003).

Según el artículo 56 del Reglamento de la Corte, y dentro del tercer período de procedimiento “si el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante y a las de las presuntas víctimas, o sus representantes, la Corte, oído el parecer de las partes en el caso, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos. En este supuesto, la Corte procederá a determinar, cuando fuere el caso, las reparaciones y costas correspondientes.”⁶¹

Según el artículo 67⁶² de la Convención Americana, los fallos de la Corte tienen naturaleza definitiva e inapelable, es decir, no se los puede modificar posterior al fallo. Existe la posibilidad, según el artículo 68⁶³ de la misma Convención, que dentro de los noventa días siguientes a la notificación del fallo, y si existe algún desacuerdo sobre el sentido o alcance del mismo, la Corte emita una interpretación de la sentencia, por medio de solicitud de alguna de las partes. Si la sentencia es dada, se establecen las reparaciones pertinentes para cada caso.

Dentro del análisis, tomando como base los planteamientos de Donnelly (Donnelly, 1968) expuestos en el subcapítulo anterior, el SIDH es un régimen de promoción fuerte, ya que ha realizado varias convenciones, declaraciones, reglamentos e instrumentos regionales de protección de DH; de ejecución medio, ya que cuenta con la CIDH y la CorteIDH, las cuales procesan las violaciones de DH, emiten fallos y medidas de carácter obligatorio para los Estados; aunque hay varias falencias a nivel coercitivo⁶⁴; y de puesta en práctica medio ya que cuenta con mecanismos de vigilancia como informes anuales de cumplimiento de las

⁶¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23, en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/ene_2009_esp.pdf Artículo 56, (Visitado 09/05/2014).

⁶² Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 67, en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm, (Visitado 09/05/2014).

⁶³ *Ibíd.*, artículo 68.

⁶⁴ Por el hecho de que no todos los instrumentos con los que consta son obligatorios.

obligaciones en materia de DH frente a la CIDH y a la CorteIDH, sin embargo no cuenta con órganos especializados y mandatos específicos desarrollados para el continente.

Según los planteamientos de Young, este régimen estaría enmarcado en las categorías de regulatorio y procedimental. Regulatorio ya que consta de órganos políticos y de protección de DH postulados dese la Carta de la OEA y la DADH, los cuales constan de declaraciones, convenciones, protocolos y que, a la par, realizan un monitoreo del cumplimiento de las obligaciones regionales. Procedimental ya que consta de mecanismos de toma de decisiones con el fin de lograr objetivos comunes que beneficien a la región en materia de DH.

Capítulo 2

2. Análisis comparativo de casos

El presente capítulo tiene por objetivo describir y comparar: el caso Ecuatoriano de Juan Chaparro y Freddy Lapo ocurrido en 1997 y, el caso Argentino de Juan Bayarri ocurrido en 1991.

Se busca encontrar las diferencias y similitudes en torno al accionar del Estado ecuatoriano ante el caso de Juan Chaparro y Freddy Lapo; y del Estado argentino en relación al caso de Juan Bayarri. Partiendo de las sentencias emitidas por parte del RRDH en América.

Para cumplir con el objetivo se describe primero en que consiste cada caso, luego se explica de manera estructurada las diferentes épocas en las que tuvieron lugar las violaciones de los DH y como esto determinó que los casos sean llevados a la CIDH. Posteriormente se explica el accionar de los estados frente a cada caso; cuando fue realizada la petición de las víctimas ante la CIDH, el tratamiento dado por la CIDH; el accionar del Estado en torno a las recomendaciones de la CIDH; la remisión a la CorteIDH; y finalmente el accionar de los estados en torno a las decisiones de la CorteIDH.

Posteriormente se hace un balance y perspectivas comparativas de los casos, y se expone los efectos de las decisiones dentro de los países.

2.1 Caso ecuatoriano – Juan Carlos Chaparro y Freddy Lapo.

Juan Carlos Chaparro, de nacionalidad chilena, era dueño de la fábrica de “Aislantes Plumavit compañía limitada”, dedicada a la fabricación de hieleras para el transporte y exportación de distintos productos; mientras que Freddy Lapo, de nacionalidad ecuatoriana, era el gerente de la misma.

De acuerdo al informe presentado por la CIDH ante la CorteIDH:

Con motivo de la “operación antinarcótica Rivera”, oficiales de policía antinarcóticos del Guayas incautaron el 14 de noviembre de 1997, en el Aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, un cargamento de pescado de la compañía Mariscos Oreana “Maror”, contenido en 144 cajas de cartón, que se encontraban en los patios de la empresa aérea AECA para ser embarcado con destino a Miami (EEUU). En el interior de estas cajas se encontró unas cajas térmicas o hieleras en las que se detectó la presencia de droga (clorhidrato de cocaína y heroína). Dado que en la Fábrica Plumavit se fabricaban hieleras, el señor Juan Carlos Chaparro fue considerado sospechoso de pertenecer a una “organización internacional delincuencia” dedicada al tráfico internacional de clorhidrato de cocaína que operaba en Ecuador, motivo por el cual la Jueza Duodécima de lo Penal del Guayas dispuso el allanamiento de la fábrica Plumavit y la detención con fines investigativos de su dueño. El señor Hernán Lapo fue detenido, junto con otros empleados de la Fábrica Plumavit, durante el allanamiento. (OEA, CIDH, 2006, p.1).

2.1.1 Época.

Para 1997 el país estaba en una crisis política; Adbalá Bucaram fue derrocado en febrero de 1997 por medio de un movimiento popular y posteriormente destituido por el Congreso, mismo que nombró como presidente interino a Fabián Alarcón. Alarcón fue ratificado como presidente el 25 de mayo del mismo año. Posteriormente se elige una Asamblea Nacional, presidida por Osvaldo Hurtado, para reformar la Constitución Política (Adoum, 2000.)

La detención de los involucrados se realiza dentro de la presidencia de Fabián Alarcón, mientras que la demanda ante la CIDH se da en 1998.

En el Ecuador la lucha contra las drogas fue abriéndose paso desde los años 70, en principio el enfoque utilizado para abordar esta temática fue sanitario y de seguridad nacional; creándose así “la ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes de 1970, enfatizaban los aspectos de prevención del abuso de drogas ilícitas como un tema de salud pública.” (Calderón, 2011, p. 51).

A pesar de que el país no presentaba una oferta y demanda alta, en materia de drogas, si tenía vinculación en la lucha contra el narcotráfico por la “afinidad”⁶⁵ con los Estados Unidos, ya que ellos lideran el paradigma de guerra contra las drogas. A raíz de lo dicho el Ecuador, en 1978 crea la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. (Calderón, 2011).

“Si bien en las décadas de los 80 (...) el papel del país respecto a las estrategias de seguridad relacionadas con el narcotráfico se habían presentado con un

⁶⁵ Puede verse como presión.

bajo perfil”(Youngers; Rossin, 2005, p. 297), Ecuador empieza a vincularse con los Regímenes Internacionales de Lucha contra las Drogas, y a adoptar normativas internacionales⁶⁶ para la lucha contra las mismas, lo que conlleva a un aumento de su participación y acción a nivel nacional e internacional.

“Esta inserción se caracteriza por el desconocimiento que el fenómeno de las drogas y el tráfico de las mismas representaba para el país. Ecuador sin hacer un examen riguroso del problema del narcotráfico, estableció convenios⁶⁷ para combatir el consumo y tráfico de drogas utilizando diagnósticos estadounidenses que asociaban de manera general guerrilla y narcotráfico.” (Rivera, 2005, p. 297).

Además el Ecuador se vincula a la lucha contra las drogas debido a su situación geoestratégica, al ser considerado punto de conexión y por tener una relativa importancia para el tráfico de cocaína hacia mercados internacionales. La frontera norte es utilizada para el abastecimiento de precursores químicos destinados a la industria del narcotráfico localizado en el sur de Colombia. (Rivera, 2005, p. 291).

Para 1987 se crea una nueva ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, misma que se endurece para estar de acuerdo con los lineamientos de los tratados internacionales, y aplica sanciones rígidas para controlar la oferta y demanda de drogas, tal como las condenas de prisión de 12 a 16 años.

“En 1990 la dirección de la política de lucha contra las drogas se enfoca totalmente en un régimen prohibicionista y punitivo a partir de la creación de la Ley 108 de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas⁶⁸. Esta ley se caracteriza por ser una de las más fuertes en materia de drogas de Latinoamérica y ello se da debido a que en esos años Ecuador responde a nuevas exigencias internacionales como las políticas de Estados Unidos sobre control de drogas en la región.” (Calderón, 2011, p. 52).

En materia de DH, el país realizó importantes transformaciones en la protección y garantías fundamentales de los ciudadanos y de las colectividades, el cual se concretó, el 5 de julio de 1998, con la aprobación de la Asamblea Nacional

⁶⁶ Entre estas la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, firmado en 1989 y ratificado en 1990. En: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-19&chapter=6&lang=en, (visitado: 02/10/2014).

⁶⁷ Tales como la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, promulgada en 1991 por Estados Unidos.

⁶⁸ La ley 108, creada en 1990, se caracteriza por la criminalización indiferenciada de transportistas de pequeñas cantidades –mulas-, pequeños expendedores y grandes redes de traficantes.

Constituyente, de la Nueva Constitución Política del Ecuador, misma que tuvo un alcance significativo en lo referente a DH. (Moreira, 2000, p. 7).

Cabe destacar que, dentro de este período y de esta nueva Carta Política, se encontraba un Plan Nacional de Derechos Humanos el cual trajo beneficios de los derechos fundamentales de los hombres, mujeres, niños y niñas del Ecuador. (Moreira, 2000).

Posteriormente a la resolución del “conflicto con el Perú (...) se configura (...) la nueva agenda de seguridad nacional y el rol que deberían asumir las fuerzas armadas y la policía.” (Rivera, 2005, p. 298). La temática de drogas se vuelve un tema importante para el Ecuador, en especial la lucha contra el tráfico de las mismas, enfatizado en la reducción de su oferta y demanda.

“Esta situación trajo varias repercusiones para el Ecuador.(...) el flujo de recursos adicionales destinados a la Policía Nacional y el Ejército llevaron a una redefinición de prioridades e incrementaron la competencia institucional” (Rivera, 2012, p. 158), dando impulso a allanamientos lícitos e ilícitos por parte de estas dos entidades públicas.

“En el caso de la Policía Nacional no ha existido interés por conocer las acciones realizadas por varias unidades de élite. (...) Tan solo los medios de comunicación y grupos defensores de los derechos humanos han difundido casos de abuso de poder o violaciones a la libertad de expresión de varios individuos sospechosos de colaborar con el narcotráfico o actividades ilícitas” (Rivera, 2012, p. 162).

Si se toma en cuenta la ley 108 y la presión de Estados Unidos, se puede explicar el accionar del Estado que a continuación será analizado para el caso de Juan Carlos Chaparro Y Freddy Lapo.

2.1.2 Accionar del Estado.

El 14 de noviembre el Coronel de Policía Luis Martínez Castillo, solicitó a la Jueza Duodécimo de lo Penal del Guayas, la Dra. Guadalupe Manrique Rossi que se dieran órdenes de detención en contra de varias personas, entre ellas, el señor Juan Carlos Chaparro.

El 15 de noviembre de 1997 el señor Juan Carlos Chaparro, de ciudadanía chilena, fue detenido por la policía antinarcóticos del Guayas con el fin de

investigarlo en presencia de la mencionada jueza mientras se encontraba en su domicilio ubicado en Guayaquil, esto sin ninguna orden de detención, sin ser informado de los motivos de la misma ni de su derecho de asistencia consular.⁶⁹ Una vez detenido, el Señor Chaparro fue trasladado al Cuartel Modelo de la Policía Nacional en Guayaquil. (OEA, CIDH, 2006).

El mismo 15 de noviembre, la Fábrica Plumavit, propiedad del señor Chaparro, fue allanada por miembros de la Policía Nacional y del Consejo Nacional de Sustancias Estupeficientes y Psicotrópicas (CONSEP), mismos que no presentaron la orden de allanamiento correspondiente. La Fábrica Plumavit y todo lo que allí se encontraba, así como el automóvil de marca Subaru placas GDK-410 propiedad del Gerente de Producción de la fábrica, señor Freddy Lapo, fueron aprehendidos en ese momento y quedaron bajo resguardo policial. Por medio de la aprehensión el señor Lapo perdió un departamento al no poder continuar con sus pagos; mientras que el señor Chaparro perdió su departamento en la ciudad de Salinas por no poder continuar con los pagos; además el CONSEP arrendó la fábrica a terceras personas, acción que no está permitida por la ley.⁷⁰

En el allanamiento además fueron detenidos empleados de la empresa, incluido el señor Lapo, quien fue trasladado al Cuartel Modelo de la Policía Nacional donde estuvo incomunicado por 3 días hasta que rindió declaración en presencia de un Agente Fiscal y una Defensora Pública, nombrada de oficio el 19 de noviembre de 1997. (OEA, CIDH, 2006).

Por su parte, el señor Chaparro permaneció incomunicado en el Cuartel Modelo de la Policía Nacional por tres días a partir de su detención. En este tiempo se lo interrogó en las oficinas de la policía, para posteriormente rendir su declaración el 19 de noviembre de 1997, 4 días después de su detención. En el momento de la declaración, el señor Chaparro fue informado oralmente por la Policía que se lo vinculó a un caso de narcotráfico, conocido como “Operación Rivera”, como aparente

⁶⁹ Violando el artículo 4 literal 10 de la ley orgánica del servicio exterior. En: <http://www.consuladoecuador.org.uk/pdf/Lose.pdf>, (visitado: 27/08/2014).

⁷⁰ Violando el artículo 12.4 de la Ley sobre Sustancias Estupeficientes y Psicotrópicas que dice: “Entregar, provisionalmente, los bienes aprehendidos o incautados que hubieren sido dados en depósito al CONSEP, a instituciones públicas, previo informe de la Secretaría Ejecutiva.” Ver Reglamento para la Aplicación de la Ley sobre Sustancias Estupeficientes y Psicotrópicas Publicado en el Registro Oficial, Órgano de Gobierno del Ecuador, en Quito, el 7 de marzo de 1991 en: http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/EC/decreto_2145.pdf, (visitado 27/08/2014).

proveedor de cajas de poliestireno expandido, en cuyo fondo existía droga y en las cuales se pretendía exportar pescado. (OEA, CIDH, 2006).

Posteriormente a rendir esta declaración, los señores Chaparro y Lapo continuaron detenidos en el Cuartel Modelo de la Policía Nacional, hasta el 24 de noviembre de 1997, que ante la reiterada petición del señor Chaparro, la Dirección Nacional de Investigaciones, de la Jefatura Provincial Antinarcóticos del Guayas, pidió la ejecución de un peritaje a la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) con el objetivo de establecer si las hieleras donde se encontró la droga podrían haber sido fabricadas por la empresa Aislantes Plumavit. Igualmente, con fecha 24 de noviembre de 1997, el Jefe Provincial Antinarcóticos del Guayas, Luis Martínez Castillo, envió el parte informativo preliminar relacionado con los “detenidos investigados” durante la Operación Rivera a la Jueza Duodécima de lo Penal del Guayas. En el mismo se señalaba que “luego de las primeras investigaciones se ha llegado a la conclusión que no existen pruebas contundentes” de su participación en el delito de tráfico ilícito de drogas. (OEA, CIDH, 2006).

El 8 de diciembre de 1997, la Jueza Guadalupe Manrique Rossi dictó “auto de cabeza del proceso”⁷¹ respecto de los detenidos investigados en la “Operación Rivera” y la prisión preventiva contra los señores Juan Carlos Chaparro y Freddy Lapo por encontrarse reunidos, a su juicio, los requisitos previstos en el artículo 177 del Código Procesal Penal⁷². Ordenó el “depósito” de todos los bienes aprehendidos durante la “Operación Rivera” en el CONSEP, entre los que se encontraban la Fábrica Plumavit y el vehículo del señor Lapo. (OEA, CIDH, 2006, p. 4).

La jueza encargada del caso dictó prisión preventiva contra el señor Chaparro y el señor Lapo el 8 de diciembre de 1997, sindicados de tráfico ilícito de drogas. Ese mismo día se trasladó a los sindicados al Centro de Rehabilitación Social de Varones del Guayaquil. (OEA, CIDH, 2006).

⁷¹ Procedimiento que realiza el juez sin pedimento de parte para la investigación del delito y de los delincuentes. En: <http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=es&st=1&page=showid&start=0&base=alkonaeconomia&id=767&letter=A#.U62ze415Omc#ixzz35rf2js7m> (visitado: 27/06/2014).

⁷² El artículo 177 del Código Procesal Penal establecía que el juez podía ordenar la prisión preventiva cuando lo creyese necesario, siempre que aparecieran los siguientes datos procesales:

1. Indicios que hagan presumir la existencia de un delito que merezca pena privativa de libertad; y
2. Indicios que hagan presumir que el sindicado es autor o cómplice del delito que es objeto del proceso (...).

El resultado del peritaje del 8 de diciembre de 1997 fue enviado por la Jefatura Antinarcóticos del Guayas a la Jueza Duodécima de lo Penal del Guayas. En esta se estableció que las cajas térmicas en las que se encontró la droga fueron fabricadas con diferentes moldes, con diferente técnica y medidas a las elaboradas por la Fábrica Plumavit; lo que, según la jueza relacionaba a los señores Chaparro y Lapo como cómplices del delito de narcotráfico. (OEA, CIDH, 2006).

El 5 de enero de 1998 se realizó el reconocimiento de la Fábrica Plumavit, a más de tres nuevos peritajes en los que se estableció que es imposible que las hieleras incautadas con droga fueran fabricadas con los moldes de esta fábrica, ya que se encontraban adulteradas y no coincidían con el modelo original de las cajas fabricadas en la empresa. Antes de la realización de los peritajes mencionados, la Jueza Duodécima de lo Penal otorgó el permiso para llevar las cajas depositadas en el CONSEP como evidencia del ilícito a la Fábrica Plumavit, para hacer las comparaciones pertinentes de las hieleras incautadas con los moldes existentes en la Fábrica Plumavit. (OEA, CIDH, 2006).

A pesar de que se realizaron 4 peritajes, el 7 de enero de 1998 a las 18:30 horas, la Jueza Guadalupe Manrique Rossi que al día siguiente que se realizara un peritaje denominado ION-SCANNER⁷³ en el local de la Fábrica Plumavit a las 10:00 horas. No pudieron asistir a la diligencia las partes involucradas, ya que fueron notificadas el mismo día 8 de enero a las 9:00 horas de la mañana. (OEA, CIDH, 2006).

El quinto peritaje (ION-SCANNER) concluyó que había “una reacción positiva ante la presencia de cocaína en la máquina n° 5 situada en la fábrica Plumavit”. A pesar de que los dos peritos solicitaron que se les concediera un plazo de 5 días para presentar sus respectivos informes, éstos nunca fueron presentados. En su lugar, Víctor Cortez, Jefe de la Oficina de Combate a las Drogas “D.E.A.”, por sus siglas en inglés, (Drug Enforcement Administration) envió un escrito a la Jueza Guadalupe Manrique Rossi el 9 de diciembre de 1998, en el que indicaba que dos peritos judiciales y otra persona descubrieron una reacción positiva a la presencia de cocaína en la Máquina Número 5 (Máquina Moldeadora de Plumafón), después de

⁷³ Es descrito como un cilindro electrónicamente cargado, equipado con los llamados anillos de enfoque. Las moléculas ionizadas se recogen en un hisopo y se colocan en el "scanner". Después de haber sido calentado a una 191 grados Celsius, dibujan a través del dispositivo la velocidad de los iones. Supuestamente, esta información identifica la presencia de moléculas de droga. En: http://www.nyclu.org/ion_scanner_pr_040604.html, (visitado: 27/04/2014).

realizar pruebas con el equipo electroquímico en el almacén y en el área de la oficina con ayuda del químico David Morillo. El equipo electroquímico indicó que la cocaína había estado en la máquina o cerca de la máquina moldeadora de plumafón. (OEA, CIDH, 2006).

Este peritaje fue declarado inútil el 23 de diciembre de 1998 en el dictamen del Ministerio Público (hoy Procuraduría General de Estado), debido a que consideró que existían gran cantidad de irregularidades, entre ellas, la notificación “apresurada” de su realización por las partes procesales, así como la falta de remisión de sus correspondientes informes por parte de los peritos. Debido a las irregularidades, la Cuarta Sala de lo Penal, el 30 de octubre de 2001, declaró que a este peritaje no se le podía otorgar la calidad de prueba por no ofrecer las debidas garantías, traspasando el caso al Juez Octavo de lo Penal de Guayas. (OEA, CIDH, 2006).

El 25 de mayo de 1999 el Juez Octavo de lo Penal del Guayas, Dr. Rada Viteri Luis Alfredo, declaró abierta la etapa del plenario contra el señor Juan Carlos Chaparro, “habiéndose comprobado conforme a derecho la existencia material de la infracción y el nexo causal de responsabilidad con los sindicatos”.⁷⁴ En ese mismo auto el Juez Octavo de lo Penal del Guayas dictó sobreseimiento provisional del proceso del sindicado Freddy Lapo por “no existir pruebas suficientes de su participación en el delito pesquisado”. El señor Lapo permaneció en régimen de prisión preventiva 1 año, 5 meses y 17 días, en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, siendo liberado el 12 de junio de 1999. (OEA, CIDH, 2006).

El señor Chaparro fue liberado el 22 de agosto de 1999, tras haber estado en régimen de prisión preventiva durante un 1 año, 6 meses y 11 días en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, en aplicación del artículo 24 numeral 8 de la Constitución de la República de Ecuador de 1998, que expresa:

“La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa. En todo caso, y sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, el detenido recobrará inmediatamente su libertad, sin perjuicio de cualquier consulta o recurso pendiente. A

⁷⁴ Es decir la existencia de responsabilidad de los miembros de la compañía, en el caso del señor Chaparro.

este artículo se apeló para la liberación tanto de Lapo como de Chaparro, pero incumpliendo con el plazo establecido en el mismo.” (OEA, CIDH, 2006, p.35).

El 30 de octubre de 2001, la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia dictó auto de sobreseimiento provisional del proceso y del sindicado, señor Chaparro, por no existir prueba suficiente de su participación en la comisión del delito de narcotráfico. En ese sentido, la Cuarta Sala estableció que al peritaje ION-SCANNER, realizado el 8 de enero de 1998, no podía ser una prueba; porque no ofrece garantías, ya que días antes los peritos que realizaron el examen de las máquinas productoras de las cajas hieleras y de los moldes, las habían manipulado, lo que podría explicar que los residuos de cocaína contenidos en éstas hayan contaminado la maquinaria o caído cerca de la maquina moldeadora de plumafón, como señala el resultado del ION-SCAN.⁷⁵ En el mismo auto se dictó el sobreseimiento definitivo del señor Lapo (OEA, CIDH, 2006).

Finalmente, el 23 de febrero de 2006, se confirmó el auto de sobreseimiento definitivo de Juan Carlos Chaparro y se dispuso el archivo de la causa seguida contra Juan Carlos Chaparro y Freddy Hernán Lapo, con lo que la sentencia absolutoria quedó firme. (OEA, CIDH, 2006).⁷⁶

2.1.3 Petición de las víctimas ante la CIDH.

Los señores Chaparro y Lapo fueron privados de libertad por la aplicación del artículo 116 de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas⁷⁷, mismo que fue declarado inconstitucional mediante la Resolución 119-1-97 del 24 de diciembre de 1997 por Tribunal Constitucional del Ecuador, ya que presumía la culpabilidad del implicado, contraviniendo el principio constitucional de presunción de inocencia.

El señor Juan Carlos Chaparro presentó un amparo de libertad el 20 de mayo de 1998 ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, este le fue denegado por improcedencia el 21 de mayo de 1998, a juicio de esa Corte no era necesario analizar

⁷⁵ Cfr. Informe del peritaje de la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia, pág. 504. En: <http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/blogs.dir/8/files/2009/libros/R.J.200205.pdf>, (visitado: 20/06/2014).

⁷⁶ Para mayor comprensión ver anexo 4.

⁷⁷ El artículo 116 de la Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes establecía que: El parte informativo de la Fuerza Pública y la declaración preprocesal rendida por el indicado en presencia del Agente Fiscal, constituirán presunción grave de culpabilidad, siempre que se hallare justificado el cuerpo del delito.

el auto de prisión preventiva porque éste constituía una discrecionalidad de la Jueza Guadalupe Manrique Rossi.

El señor Freddy Lapo solicitó la revocación de la prisión preventiva dictada en su contra el 26 de diciembre de 1997 ante la Jueza Guadalupe Manrique Rossi. El fundamento de su solicitud se encontraba basado en el informe policial de fecha 24 de noviembre de 1997, en el mismo se señalaba que se había llegado a la conclusión de la inexistencia de pruebas contundentes en contra de los detenidos investigados durante la “Operación Rivera” y, en el hecho de que no se había encontrado droga en la planta de la fábrica ni en su poder. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada el 12 de enero de 1998 por la Jueza Guadalupe Manrique Rossi, ya que el proceso aún se encontraba en investigación.

Posteriormente, el señor Lapo interpuso un amparo de libertad el 13 de abril de 1998 ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, siendo denegado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil el 14 de mayo de 1998, a razón de que el trámite del proceso estaba cumpliendo el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal.

El 3 de septiembre de 1998 el señor Freddy Lapo presentó un recurso de hábeas corpus ante el alcalde, tal y como estaba previsto en el artículo 28 de la Constitución de Ecuador⁷⁸, mismo que fue rechazado el 4 de septiembre de 1998, al establecer sin fundamentación alguna que no procedía. (OEA, CIDH, 2006). Al recibir la respuesta, y con la convicción de haber agotado los recursos internos se acude a la CIDH.

Las peticiones ante la CIDH por parte de las víctimas se dieron por separado; el primero en acudir fue Juan Chaparro, por parte del cual la CIDH recibió la denuncia el 8 de septiembre de 1998 y el 15 de enero de 1999 recibió información adicional presentada por su hijo.

El 26 de enero siguiente, la CIDH envió la petición bajo el número de caso 12.091 al Estado, y solicitó una respuesta dentro de 90 días. El 24 de marzo de 1999

⁷⁸ Toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad podrá acogerse al Hábeas Corpus. Este derecho lo ejercerá por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el Alcalde bajo cuya jurisdicción se encontrare o ante quien hiciere sus veces. La autoridad municipal ordenará inmediatamente que el recurrente sea conducido a su presencia y se exhiba la orden de privación de la libertad. Su mandato será obedecido sin observación ni excusa por los encargados del centro de rehabilitación social o lugar de detención. Artículo 93. Constitución de la Republica de Ecuador, 1978.

la CIDH recibió la respuesta del Estado por parte de la Procuraduría General⁷⁹, en la que alegó que el peticionario no había agotado los recursos internos, alegando que el proceso penal continuaba pendiente ante el tribunal de lo Penal de la Dra. Guadalupe Manrique, Jueza Duodécima de lo Penal. Sin embargo la CIDH resuelve que estos si fueron agotados, (OEA, CIDH, 2006), ya que los peticionarios presentaron documentación acerca de todo su proceso, de las violaciones perpetradas y del tiempo transcurrido. Cabe destacar, que las víctimas fueron liberadas de su prisión, lo que demuestra que los recursos se agotaron dentro del Estado y que además su caso fue terminado.

Por su parte el señor Freddy Lapo envió su caso a la CIDH el 14 de abril de 1999, siendo nombrado como abogado el señor Edgar Freddy Ezpinoza y el señor Juan Ferruzola para tramitar su caso ante la CIDH. La CIDH recibió el 22 de marzo y 24 de mayo de 2002 información adicional en relación al caso del señor Lapo y posteriormente remitió al Estado el caso solicitando una respuesta en el plazo de dos meses.

En su respuesta, dada en 30 de septiembre del 2002, el Estado por medio de la Procuraduría General, pide a la CIDH que rechace la petición puesto que, a criterio del Estado, la misma no cumple los requisitos del artículo 46 de la Convención Americana⁸⁰ y del artículo 38 del Reglamento de la CIDH⁸¹. El Estado señala que el Tribunal Superior de Guayaquil desestimó los cargos de los cuales le acusaba al señor Lapo, y que con ello logró su libertad. El Estado establece que, a la CIDH no le compete examinar los fallos de los tribunales nacionales, actuar dentro de sus esferas

⁷⁹ En la respuesta el Estado expresa que: La posición de la Procuraduría General era que la petición 12.091 no cumplía con los requisitos de admisibilidad del artículo 46 de la Convención porque el Sr. Chaparro no había agotado los recursos internos antes de presentarse a la Comisión. A juicio del Estado, en este caso no se agotaron los recursos internos. (...)el Estado observó que el proceso penal pendiente ante el Tribunal de lo Penal de la Dra. Guadalupe Manrique Rossi, Jueza Duodécima de lo Penal, ha procedido normalmente. Estas actuaciones permitieron la intervención de expertos especializados, que emitieron informes favorables al peticionario, tanto que el Ministerio Público emitió su opinión, en la que se abstiene de acusar formalmente al Sr. Chaparro. Que estas actuaciones puedan resultar favorables al Sr. Chaparro o no, no significa que no sean los procedimientos adecuados. En: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. INFORME N° 77/031 PETICIONES 12.091 y 172/99 ADMISIBILIDAD JUAN CARLOS CHAPARRO ALVAREZ FREDDY HERNAN LAPO IÑIGUEZ ECUADOR 22 de octubre de 2003.

⁸⁰ Véase anexo 5.

⁸¹ **Artículo 38. Presunción:** Se presumirán verdaderos los hechos alegados en la petición cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Estado en cuestión, si éste no suministra información relevante para controvertirlos dentro del plazo fijado por la Comisión, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. En: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp>, (visitado: 02/10/2014).

de competencia y aportar las debidas garantías judiciales, a menos que concluya que se ha cometido una violación de la Convención.(OEA, CIDH, 2003).

Pero como se verá más adelante, la CIDH es competente de analizar el caso ya que fueron violentado los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, propiedad privada y protección judicial de la DADH.

Finalmente el Estado no discute que los recursos internos se han agotado, y la CIDH concluye que en este caso se han agotado los recursos internos; el caso entró a la CIDH bajo el número de petición P-172/99.

2.1.4 Tratamiento dado por la CIDH.

La petición, P.12.091, del Sr. Chaparro, y P.172/99, del Sr. Lapo, se dan dentro de un mismo contexto, por esta razón la CIDH, fundamentándose en el artículo 29 de su Reglamento⁸², resuelve acopiar las mismas y tramitar conjuntamente la peticiones el 22 de octubre del 2003.

La CIDH resuelve que las peticiones son admisibles a razón de que: en el caso del Sr. Chaparro “el Estado sostiene que los recursos han sido agotados en este caso y argumenta que el peticionario no invocó recursos disponibles como la acción de casación o la acción de revisión. (...) como el peticionario fue liberado y la Sala Cuarta del Tribunal Superior desestimó “provisionalmente” los cargos que se le imputaban, (...), la Comisión concluye que en este caso se han agotado los recursos internos con la decisión de la Sala Cuarta.” (OEA, CIDH, 2003, p. 10).

El plazo para la presentación de la petición es el adecuado, según el artículo 46 de la Convención⁸³, ya que la denuncia ante la CIDH se dio el 8 de septiembre de 1998, fundamentado en el hecho de haber sido detenido en forma arbitraria e ilegal. Los tribunales ecuatorianos no negaron los cargos imputados al Sr. Chaparro por falta de pruebas que lo inculparan hasta el 12 de noviembre de 2001. (OEA, CIDH, 2003)

En el caso del Sr. Lapo “ el Estado no discute que los recursos internos se han agotado en este caso, y que dicho agotamiento concluyó con el pronunciamiento de la orden de liberación definitiva, el 26 de octubre de 2001, y la liberación del

⁸² Si dos o más peticiones versan sobre hechos similares, involucran a las mismas personas, o si revelan el mismo patrón de conducta, la Comisión las podrá acumular y tramitar en un mismo expediente.

⁸³ Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva.

petionario. En consecuencia, la Comisión concluye que en este caso se han agotado los recursos internos.” (OEA, CIDH, 2003, p.10).

Mientras que el petionario presentó la denuncia a la CIDH el 14 de abril de 1999, dando información de su caso hasta el 24 de mayo del 2002; la denuncia fue comunicada al Estado el 7 de junio de 2002, y el Estado incorrectamente concluyó que la petición no había sido presentada hasta esa fecha, cuando, en realidad, estuvo dentro del plazo. (OEA, CIDH, 2003).

Posteriormente a la admisibilidad de las peticiones, la CIDH, en concordancia con el artículo 38 del Reglamento de la misma, el 29 de octubre de 2003 la CIDH remitió el Informe N° 77/03 tanto al Estado como a los peticionarios, dando un plazo de 2 meses para que presentaran sus observaciones adicionales. El Sr. Lapo envió sus observaciones el 8 de diciembre de 2003, indicó que deseaba realizar el proceso para la solución amistosa expuesta en el artículo 48 de la Convención⁸⁴. El señor Juan Carlos Chaparro presentó sus observaciones el 29 de diciembre de 2003 y pidió a la CIDH que continúe el análisis de fondo.

La CIDH pidió al Estado que indicara sus observaciones en dos ocasiones, el 22 de enero y el 5 de febrero del 2004. En julio de 2004 iniciaron las conversaciones entre el Estado y el Sr. Chaparro para llegar a una solución amistosa. El 22 de julio de 2004, el señor Chaparro envió al Estado una propuesta de solución amistosa. La CIDH otorgó una audiencia en la que las partes podían alcanzar un acuerdo de solución amistosa, pero en el transcurso de la audiencia, celebrada el 4 marzo de 2005, el Sr. Chaparro solicitó a la CIDH continuar con el análisis del fondo a razón de ser imposible llegar a un acuerdo sobre montos de indemnización.

El 22 de marzo de 2005 el Estado presentó su contestación sobre el fondo, escrito que había sido solicitado en fechas 29 de octubre de 2003, 22 de enero de 2004 y 5 de febrero de 2004.

El 28 de febrero de 2006, la CIDH aprobó el informe de fondo N° 6/06, conforme al artículo 50 de la Convención⁸⁵. En él la CIDH concluyó que el Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal (artículo 5), a la libertad personal (artículo 7), a las garantías judiciales (artículo 8), a la propiedad

⁸⁴ Se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.

⁸⁵ De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado.

privada (artículo 21) y a la protección judicial (artículo 25) de la DADH⁸⁶, en relación a los señores Chaparro y Lapo. (OEA, CIDH, 2006).

En el Informe N° 6/06, la Comisión enunció al Estado las siguientes recomendaciones:

Proceda a otorgar una reparación integral; conceder la indemnización correspondiente en relación a los patrones internacionales a los Sres. Chaparro y Lapo, por daños materiales y perjuicios económicos sufridos; se ordene una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de las violaciones que la CIDH ha encontrado, y eventualmente sancionarlos; se tomen las medidas necesarias para la reforma de la legislación sobre habeas corpus, en los términos que ha quedado dicho en el [...] informe, así como también las medidas necesarias para su inmediata vigencia.⁸⁷

El informe de fondo fue transmitido al Estado el 23 de marzo de 2006 dándole un lapso de dos meses para adoptar las recomendaciones previstas en el mismo. “El 23 de marzo y 8 de junio de 2006, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de su Reglamento, la Comisión notificó a los peticionarios la adopción del informe de fondo y su transmisión al Estado y solicitó a aquéllos que expresaran su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte Interamericana.” (OEA, CIDH, 2006, p. 6).

Posteriormente a lo dispuesto por la CIDH en su informe de fondo⁸⁸, este le fue comunicado al Estado el 23 de marzo de 2006, teniendo el mismo un plazo de dos meses para que adoptara las recomendaciones en él dispuestas.

El 24 de abril y 14 de junio de 2006, las víctimas presentaron sus consideraciones. En estas solicitaron a la CIDH la remisión del caso a la CorteIDH, ya que consideraban que esta era la última instancia mediante la que se podía hacer justicia por la violación de sus DH.

⁸⁶ Ver anexo 6.

⁸⁷ Con la entrada en vigencia de la actual Constitución de la República aprobada mediante referéndum del 2008, en lo relacionado al hábeas corpus, se ha producido un cambio radical, respecto a la autoridad que conoce y resuelve esta acción, pues ahora la responsabilidad es de los jueces. (...), la eficacia del Hábeas Corpus, conforme el Art. 89 de nuestra constitución, es una garantía jurisdiccional destinada para recuperar la libertad de las personas privadas de ella en forma ilegal, arbitraria o ilegítima y también la de proteger la vida y la integridad física de las personas detenidas. En: <http://www.diariocorreo.com.ec/noticia.aspx?idNoticia=4301>, (visitado:27/08/2014).

⁸⁸ En el informe de fondo a más de las reparaciones económicas se establecía eliminación de las fichas policiales, la conclusión del proceso pendiente, y tratamiento psicológico de los señores Chaparro y Lapo

Por su parte el Estado Ecuatoriano no presentó ninguna observación. Esto devino en que el 16 de junio del 2006 la CIDH de acuerdo a los artículos 51 de la convención, este dice que “si en el lapso de tres meses, partiendo de la remisión a los Estados interesados del informe de la CIDH, el caso no ha sido solucionado o interpuesto a la decisión de la CorteIDH por parte de la CIDH o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la CIDH podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.”⁸⁹, y artículo 44 de su reglamento que versa “comunicará al peticionario la adopción del informe y su transmisión al Estado. En el caso de los Estados Partes en la Convención Americana que han aceptado la jurisdicción contenciosa de la CorteIDH, al notificar al peticionario la CIDH le dará la oportunidad de exponer, dentro de un mes, su enfoque respecto del sometimiento del caso a la CorteIDH. Si el peticionario tuviera interés en que el caso sea sometido a la CorteIDH, deberá presentar los siguientes elementos:

- a. la posición de la víctima o sus familiares, si fueran distintos del peticionario;
- b. los fundamentos con base en los cuales considera que el caso debe ser remitido a la Corte;
- c. las pretensiones en materia de reparaciones y costas.”⁹⁰.

2.1.5 Remisión a la CorteIDH.

El 24 de abril y 14 de junio de 2006, respectivamente, los señores Chaparro y Lapo solicitaron a la CIDH que remitiera el caso a la CorteIDH, consideraron que esta sería la única instancia para hacer justicia por las graves violaciones a sus DH. Transcurrido el plazo otorgado a Ecuador mismo que no presentó observación alguna. El 16 de junio de 2006 la CIDH decidió, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 51 de la Convención y 44 de su Reglamento, someter el presente caso a la jurisdicción de la CorteIDH.

“La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana⁹¹, toda vez que Ecuador es Estado

⁸⁹ Cfr. Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 51.

⁹⁰ Cfr. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 41.

Parte en la Convención desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.” (OEA, CorteIDH, 2007, p. 6).

El 23 de junio de 2006, la CIDH sometió a la CorteIDH una demanda en contra de la República del Ecuador, la que se originó en las denuncias No. 12.091 y 172/99 remitidas, respectivamente, el 8 de septiembre de 1998 por el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez y el 14 de abril de 1999 por el señor Freddy Hernán Lapo Íñiguez. (OEA, CorteIDH, 2007).

En el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, la CorteIDH estaba integrada por los siguientes jueces: Sergio García Ramírez (México), Presidente; Cecilia Medina Quiroga (Chile), Vicepresidenta; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), Juez; Diego García-Sayán (Estados Unidos), Juez; Leonardo A. Franco (Argentina), Juez; Margarette May Macaulay (Jamaica), Jueza, y Rhadys Abreu Blondet (República Dominicana), Jueza. (OEA, CIDH, 2006).

El 9 de octubre de 2006 los señores Chaparro y Lapo designaron a Xavier Flores Aguirre y Pablo Cevallos Palomeque, respectivamente, como sus abogados ante la CorteIDH, los cuales presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.

El 5 de diciembre de 2006 el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares⁹², contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos.

El 12 de enero de 2007 la CIDH y los representantes remitieron sus respectivos escritos de alegatos sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.

⁹¹ La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. En: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm, (visitado:27/08/2014).

⁹² La excepción preliminar es aquel acto procesal que objeta la admisibilidad de una demanda o la competencia del Tribunal para conocer un determinado caso o alguno de sus aspectos en razón de la persona, la materia, el tiempo o lugar; es decir, un mecanismo destinado a objetar la admisibilidad de las peticiones de la parte demandante o limitar o negar, parcial o totalmente, la competencia del órgano jurisdiccional internacional. En: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp>, (visitado: 28/06/2014).

El Presidente de la CorteIDH convocó a la CIDH, a los representantes y al Estado a una audiencia pública celebrada el 17 de mayo de 2007⁹³, en Guatemala, con el objetivo de escuchar las declaraciones de las presuntas víctimas, así como los alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares, fondo, eventuales reparaciones y costas.

Los días 18 y 25 de septiembre de 2007 el Presidente solicitó a los representantes y al Estado que remitieran nuevas pruebas para resolver mejor el caso, misma que fue allegada al Tribunal dentro del plazo establecido para ello. El 9 de octubre de 2007 el señor Lapo presentó nueva documentación relacionada con la prueba que el Presidente solicitó a sus representantes. (OEA, CorteIDH, 2007).

Dentro de la jurisdicción de la CorteIDH, se observa que el Estado Ecuatoriano no dio detalles de todo los hechos acontecidos en relación al caso; además que aceptó ciertas medidas estipuladas por la CIDH, tales como la eliminación de las fichas policiales, la conclusión del proceso pendiente, y tratamiento psicológico de los señores Chaparro u Lapo, pero cuestionó los montos exigidos por los representantes de las víctimas y guardó silencio en torno a las medidas de reparación solicitadas.

“La Corte considera que el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso, al buen despacho de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana y a la conducta a la que están obligados los Estados en esta materia.

(...)La Corte estima necesario dictar una sentencia en la cual se determinen los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias, en cuanto la emisión de la Sentencia contribuye a la reparación de los señores Chaparro y Lapo, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos.” (OEA, CorteIDH, 2007, p. 8).

Posteriormente la CorteIDH procedió a inspeccionar y juzgar los elementos de pruebas alrededor de los documentos enviados por la CIDH, y escuchó las declaraciones de las víctimas dadas a la CIDH. El señor Chaparro y el señor Lapo declararon, sobre su detención, “las gestiones realizadas en la búsqueda de justicia, la

⁹³ A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Evelio Fernández Arévalos, Comisionado, Mario López y Lilly Ching, asesores; b) en representación de las presuntas víctimas: Xavier Flores Aguirre (abogado de las víctimas), y c) por el Estado: Salim Zaidán (Agente alterno) y Gabriela Galeas (asesora).

supuesta privación de sus bienes y su posterior devolución, las acciones judiciales intentadas y las consecuencias del proceso judicial seguido en su contra.” (OEA, CorteIDH, 2007, p. 9).

Conforme las pruebas presentadas por las partes y los hechos acontecidos, la CorteIDH resolvió, conforme al artículo 63 de la Convención Americana,⁹⁴ que dice que “cuando resuelva que existió violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, la CorteIDH garantizará el goce de los derechos o libertades transgredidos. Dispondrá que se reparen las consecuencias de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”⁹⁵ que: las partes lesionadas, los señores Chaparro y Lapo, son acreedores a las reparaciones que se fijen dentro del Tribunal⁹⁶.

Por motivo de indemnizaciones la CorteIDH decidió, por unanimidad, que: en concepto de indemnización por pérdida de ingresos:

“el Tribunal dispone que el Estado deberá entregar la cantidad de US\$66.796,70 al señor Chaparro y la cantidad de US\$15.026,68 al señor Lapo, en concepto de indemnización por pérdida de ingresos durante el tiempo que estuvieron privados de su libertad. Estas cantidades deberán ser entregadas a las víctimas en un plazo no mayor a un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.” (OEA, CorteIDH, 2007, p. 56).

Por la pérdida de la casa del señor Lapo⁹⁷ y del departamento del señor Chaparro⁹⁸:

“el Tribunal decide en equidad fijar la cantidad de US\$20.000,00 y de US\$40.000,00. El Estado deberá pagar este monto al señor Chaparro y Lapo respectivamente dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia.” (OEA, CorteIDH, 2007, p. 56).

Además por concepto de acciones y “arriendo de la empresa a terceros”⁹⁹ el tribunal dispuso que al señor Chaparro se le deberá entregar la cantidad de US\$16,143.77.

⁹⁴ Véase anexo 7.

⁹⁵ Cfr. Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 63.

⁹⁶ Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

⁹⁷ Al respecto, en la audiencia pública el señor Lapo declaró que al momento de ser detenido “estaba pagando una casa que había comprado a crédito, la que perdió porque no habían ingresos.

⁹⁸ Con base en el peritaje de la señora Kuri González, solicitaron que se establezca una indemnización al señor Chaparro por la pérdida de su departamento en la ciudad de Salinas.

Por daño inmaterial, tras la petición de la CIDH:

“las víctimas han tenido un sufrimiento psicológico intenso, angustia, incertidumbre, pena, alteración de sus proyectos de vida, en virtud de la falta de justicia en un plazo razonable y respecto de todos los involucrados en los hechos que dieron origen al presente caso” (OEA, CorteIDH, 2007, p. 58).

el tribunal acordó que los señores Chaparro y Lapo deberán recibir la cantidad de US\$ 50.000,00 para cada uno; a más de US\$30.000,00 al señor Chaparro y US\$5.000.00 al señor Lapo por motivo de costas y gastos.

2.1.6 Accionar del Estado posterior a las decisiones de la CorteIDH.

Posteriormente a las decisiones tomadas por la CorteIDH, el Estado Ecuatoriano “prepara una disculpa pública y el pago de una indemnización de 457 mil dólares a favor de los ciudadanos Juan Carlos Chaparro y Freddy Lapo Íñiguez, quienes fueron ilegalmente detenidos y procesados en el Ecuador por el supuesto delito de narcotráfico.”¹⁰⁰

A su vez, para realizar el pago la procuraduría solicitó al Ministerio de Finanzas una partida presupuestaria, además de “publicar el extracto de la sentencia en los medios de comunicación impresos y en el Registro Oficial. Como una medida de satisfacción a los agraviados, el Estado deberá realizar la publicación en el diario oficial (El Telégrafo) y en otro de amplia circulación nacional por una sola ocasión.”¹⁰¹

⁹⁹ La fábrica estuvo bajo la administración del CONSEP durante casi 5 años y que momento de la devolución las maquinarias se encontraban averiadas [...] como consecuencia de su arrendamiento por 3 años a un particular”. (...)El CONSEP, tenía la obligación legal de devolver los bienes incautados “en el estado en que se encontraban al momento de la recepción, salvo el normal deterioro por el uso legítimo”.

Diversos informes del CONSEP permiten inferir un importante deterioro en los bienes incautados. La fábrica incautada fue entregada en arriendo a un particular.

En su testimonio ante la CorteIDH, el señor Chaparro afirmó que cuando se entregó la fábrica no “se notaba ningún tipo de mantenimiento durante todo [el] tiempo [de aprehensión y depósito]. De los equipos de moldeo que tenía, ninguno estaba funcionando [...] todos los equipos estaban dañados, [...] el arrendatario no dio ningún mantenimiento ni respondió por todos los daños”

La CorteIDH considera que el Estado es responsable por estos daños, toda vez que los bienes estuvieron bajo su custodia.

¹⁰⁰ <http://www.eluniverso.com/2008/02/04/0001/8/2F4D9C5B1EAC4E3D866572D43277FD3F.html> (visitado:03/04/2014)

¹⁰¹ *Ibíd.*

En lo que respecta a las disculpas públicas por parte del Estado, se publicó el mismo texto el 18 de marzo de 2008 tanto en el diario “El Telégrafo” y como en el diario “El Universo” el 7 de agosto de 2008 lo siguiente:

“EL ESTADO ECUATORIANO OFRECE DISCULPAS PÚBLICAS A JUAN CARLOS CHAPARRO ÁLVAREZ Y FREDDY HERNÁN LAPO ÍÑIGUEZ

El Estado ecuatoriano, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante sentencia de 21 de noviembre de 2007, presenta su disculpa pública a los señores Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez por la violación de sus derechos humanos.

Los señores Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez permanecieron ilegalmente privados de su libertad por agentes del Estado ecuatoriano, padecieron condiciones carcelarias incompatibles con su dignidad de seres humanos, fueron sobreseídos por el juez de la causa después de un plazo irrazonable, no se les respetó su presunción de inocencia, las detenciones que padecieron les produjeron daños materiales e inmateriales en sus vidas, y se les afectó de manera grave su honor, todo lo cual fue determinado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para reparar el daño causado y limpiar el buen nombre de los señores Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó, entre otras medidas, que se eliminen de los archivos públicos y privados los antecedentes penales y demás registros donde pueda constar información errada sobre la participación de los señores Chaparro y Lapo en un delito que jamás cometieron.

EL ESTADO ECUATORIANO REITERA QUE JUAN CARLOS CHAPARRO ÁLVAREZ Y FREDDY HERNÁN LAPO ÍÑIGUEZ SON INOCENTES DE TODOS LOS CARGOS QUE SE LES IMPUTARON.

El Estado ecuatoriano lamenta todo lo sucedido con los señores Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez y, acorde con su naturaleza democrática, manifiesta su firme compromiso de promover, respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y garantías de todas las personas sujetas a su jurisdicción.”

El Estado Ecuatoriano, tras el fallo de la CorteIDH cumplió con las demandas presentadas y acató con lo estipulado en las resoluciones de la CorteIDH.

En el período de detención de los Señores Chaparro y Lapo el país tenía un accionar específico con relación al problema de las drogas. En materia interna el Plan Nacional correspondiente al período 1992 - 1996, incorporó “las recomendaciones emitidas por la Convención de 1988 de Naciones Unidas, ante la evolución del problema, en lo relacionado especialmente al lavado de dinero, desvío de químicos, testaferrismo, intimidación, asistencia judicial recíproca, entre otros.” (CONSEP, 2007)

Para el período 1999 - 2003, “se aplicó la Estrategia Nacional para Enfrentar las Drogas, caracterizado por la puesta de práctica de los siguientes principios que regían para ese entonces: el enfoque equilibrado, convergente y ético y la responsabilidad compartida (...) el Plan buscó consensos y acuerdos entre los

organismos públicos y privados, comprometiéndolos fuertemente, sobre todo a las ONGS, en la labor de la lucha contra las drogas.” (CONSEP, 2007)

A partir del 2004 hasta el 2008 se puso en marcha el Plan Nacional de Prevención, Desarrollo Alternativo Preventivo y Control de Drogas, con el objetivo de constituir en instrumentos idóneos para enfrentar la problemática de las drogas.

Cuando la CorteIDH reconoció la violación perpetrada, en Ecuador había un cambio en relación a la visión de las drogas, la ley de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, de 2007, es una expresión de ello. En dicha ley se realizan cambios, entre ellas la distinción entre traficantes y consumidores, modificando las penas para cada uno de ellos,¹⁰² ya que los consumidores no se encuentran en la misma categoría que los traficantes, dejándose de lado la cantidad que cada persona puede portar.¹⁰³

Es decir, las leyes de drogas en el país dieron un cambio paulatino, lográndose tanto un mayor control a la violaciones de DH, como una menor penalización a en materia de drogas.

2.2 Caso Argentino – Juan Carlos Bayarri

El 24 de agosto de 1991, Mauricio Macri, hijo de Franco Macri, uno de los hombres más poderosos del país, fue secuestrado en la puerta de su casa (...) la banda de secuestradores fue denominada "banda de los comisarios", llamada así porque estaba integrada por varios integrantes de la Policía Federal, entre los que figuraban dos oficiales superiores, los cuales pidieron 6 millones de dólares para su liberación.

“Como represalia del secuestro de Mauricio Macri, el ex sargento de policía Juan Carlos Bayarri fue “secuestrado”¹⁰⁴ en la provincia de Avellaneda, constando en el expediente policial que su detención se realizó en Buenos Aires; fue trasladado posteriormente a “El Olimpo”¹⁰⁵, donde fue torturado por tres días en la

¹⁰² La primera de ellas se dio en el mes de octubre de 1997 mediante la Ley 25, publicada en el Registro Oficial No. 173, Segundo Suplemento. En esta ley expidieron Leyes Reformatorias a las Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y normas relativas a la Procuraduría General del Estado. La segunda de ella se dio mediante en el mes de Diciembre de 1997 mediante la emisión de la Ley 44, publicada en el Registro Oficial No. 218 donde se expide Ley Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

¹⁰³ Dándose una modificación radical de esta ley en el 2011. Véase: <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-consumo-personal-de-drogas-se-perdona-508250.html>, (visitado: 02/09/2014).

¹⁰⁴ Según las declaraciones del Sr. Bayarri.

¹⁰⁵ Fue un centro clandestino de detención secreto, empleado por las fuerzas armadas y de seguridad. Funcionó entre 1978 y 1979, ubicado en el barrio La Floresta Buenos Aires, en 1991 el edificio fue parte de la Policía Federal Argentina.

clandestinidad. Luego de legalizar su detención lo llevan a declarar ante el juzgado con el Juez Bonifati; según sus declaraciones su estado era deplorable y sangraba por muchos lados.

Juan Carlos Bayarri, de nacionalidad Argentina, de acuerdo al informe presentado por la CIDH ante la CorteIDH fue detenido ilegalmente y arbitrariamente el 18 de noviembre de 1991 en la provincia de Buenos Aires, Argentina,¹⁰⁶ fue torturado por agentes policiales, y sufrió de prisión preventiva por casi 13 años sobre la base de una confesión que fue obtenida bajo tortura. El informe señala que fue golpeado y sometido a descargas de corriente eléctrica.¹⁰⁷ Bajo dichas circunstancias Juan Carlos Bayarri confesó ante el Comisario Vicente Palo haber participado en la realización de una serie de ilícitos, entre los cuales estaban el secuestro realizado al señor Macri.

Ya en el juzgado se hizo caso omiso al artículo 66 del reglamento para la jurisdicción, el cual obliga al juez, que al presenciar a un sentenciado en un estado calamitoso, extraiga testimonios e inicie una causa por torturas. (OEA, CIDH, 2007).

En 2006, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina consideró que en efecto fue sometido a la tortura, transcurridos casi 16 años desde que ocurrieran los hechos, el Estado argentino no ha dado de una respuesta judicial adecuada al señor Bayarri respecto de la responsabilidad penal de los autores, ni lo ha remediado de modo alguno por las violaciones sufridas. (OEA, CIDH, 2007).

El padre del Sr. Bayarri, “secuestrado” con él y liberado dos días después, pone una denuncia en la provincia de Avellaneda, lo cual “ayuda”¹⁰⁸ al Sr. Bayarri. Sin embargo, las actuaciones en su contra continuaron, se lo mantuvo silenciado permanentemente, y al no obtener una respuesta por parte de las autoridades judiciales locales, en el año 1994 el padre efectúa la denuncia ante la CIDH”¹⁰⁹.

La denuncia fue efectuada 3 años después de la captura; por qué los medios judiciales alargaban el caso y no daban paso a una resolución oportuna del mismo al Sr. Bayarri.

¹⁰⁶ Basándose en el informe policial presentado.

¹⁰⁷ Además se argumenta que le fue confiscado un monto que ascendía los US \$2,113,00.

¹⁰⁸ Según Bayarri lo ayuda a razón de que si no existía la denuncia realizada por su padre, Juan Carlos Bayarri pudo haber desaparecido y muerto en manos de los policías.

¹⁰⁹ Extracto de: “Indemnizar a un secuestrador”, Entrevista a Juan Carlos Bayarri. en: <https://www.youtube.com/watch?v=0GgSk8OyBNM>, (visitado: 04/05/2014).

2.2.1 Época.

Argentina vivió una dictadura militar de 1976 a 1983. El golpe militar se dio el 24 de marzo de 1976, cuando el país atravesaba “violencia política, crisis institucional y descalabro económico (...) mientras, el gobierno y el peronismo se debatían en grandes conflictos internos que les impedía reaccionar frente al sostenido avance militar”(Novaro; Palermo 2003, p. 17-18).

En esta fecha “los edificios estatales fueron ocupados por las Fuerzas Armadas dando inicio a un autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, con un intento de restablecer el orden, reorganizar las instituciones y crear condiciones de auténtica democracia.”¹¹⁰. Dentro del intento de restablecer el orden se establecía la “erradicación de la subversión y las causas que favorecen su existencia”¹¹¹, dando paso a desapariciones y ejecuciones que fueron violaciones de los DH en Argentina.

Las primeras personas desaparecidas dentro del régimen militar, dentro de las cuales constaban “ministros y figuras destacadas del gobierno peronista (...) a los cuales se los identificaba como enemigos activos y enemigos potenciales del régimen” (.Schindle, 2012, p. 49). Luego hubo innumerables abusos, secuestros, daños realizados a la población Argentina y extranjera que podría representar una amenaza.¹¹² Esto dio lugar a que la CIDH, en 1977, emitiera un informe denunciando las violaciones hacia los DH perpetradas en Argentina. Por otro lado organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron diferentes desapariciones y secuestros.

Posterior a la visita de la CIDH, en 1979, se elaboró un informe más detallado de las acciones que sucedían dentro de Argentina, y se detalló que existía operaciones clandestinas donde se explica que se reprimió y aniquiló a las personas secuestradas. Además en sus conclusiones consideró que:

Personas pertenecientes o vinculadas organismos de seguridad del gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención; preocupa especialmente a la Comisión la situación de miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el Informe se puede presumir fundadamente que han muerto. ”(OEA, CIDH, 1979).

¹¹⁰ <http://www.mindef.gov.ar/publicaciones/pdf/Libro-La-construccion-de-la-Nacion-Argentina-El-rol-de-las-Fuerzas-Armadas-AAVV.pdf>, (visitado: 13/11/2014).

¹¹¹ La nación, 25 de marzo de 1976

¹¹² La Cancillería Argentina recibió pedidos de cincuenta países por personas secuestradas, entre ellos 304 italiano, 164 españoles, 48 alemanes, 36 franceses, 10 brasileños, 6 suizos, 6 peruanos, 3 norteamericanos y una sueca. En: NOVARO M, PALERMO, V, pág. 280, (2003).

El permitir la presencia y el informe de la CIDH en Argentina fue un duro golpe para los gobernantes argentinos; porqué se creía que estaban siendo condescendientes ante la presión internacional y se estaban alejando de sus convicciones y compromisos jerárquicos.”(Novaro; Palermo, 2003)

Las violaciones de los DH se siguieron cometiendo, durante los siguientes años de dictadura militar, pero en menor medida, hasta el estallido de la Guerra de las Malvinas, en 1982, y la pérdida de la misma. Posteriormente, en 1983, se dio una transición al orden democrático, pero existen, según Novaro Marcos, tres hechos fundamentales para que esto se de: en primer lugar la existencia de oposición social y política al régimen, en segundo lugar esa oposición no se plegó a la aventura bélica; y en tercer lugar, la unión de esa oposición en un mismo líder, otorgándole un enorme poder.”(Novaro; Palermo 2003).

Ese líder fue Raúl Alfonsín, el cual ganó la presidencia en elecciones democráticas en 1983. En materia económica “la inflación crecía a un ritmo del 20% mensual, la deuda externa sobrepasaba los 40.000 millones de dólares y el paro oficioso afectaba al 7% de la población activa,”¹¹³ el país en 1983 terminó con una inflación de 433,69%. El país se encontraba en una crisis económica.

En el gobierno de Alfonsín, en relación a lo acontecido con la dictadura militar y la violación a los DH “impulsó el “nunca más”, en el que se designó una comisión de personas de alta consideración moral, que no habían estado involucradas en el proceso de facto,(...) nunca fueron sospechadas de participar en ningún acto violatorio de derechos humanos. Dicha comisión, escuchó el testimonio de cientos de personas y recibió miles”¹¹⁴. Además “firmó el decreto para someter a proceso ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las tres juntas militares, (...) por su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976 y 1983.”¹¹⁵

En ese marco, se debate y sanciona la Ley 23.492 denominada de “Punto Final”, misma que “extingue la acción penal siempre que el perpetrador no estuviera prófugo, declarado en rebeldía o haya sido citado a prestar declaración (...) no se

¹¹³ http://www.avizora.com/publicaciones/biografias/textos/textos_a/0061_alfonsin_raul.htm, (visitado:03/09/2014).

¹¹⁴ <http://www.terreleyasociados.com/estudio/derecho/LA%20BEDIENCIA%20DEBIDA%20Y%20PUNTO%20FINAL.doc>, (visitado, 16/11/2014).

¹¹⁵ http://www.avizora.com/publicaciones/biografias/textos/textos_a/0061_alfonsin_raul.htm, (visitado:03/09/201).

extingue en ningún caso cuando se haya cometido o sospechado de haber cometido delito de sustitución de estado civil y sustracción y ocultación de menores.”¹¹⁶

Además se crea la ley 23.512 de Obediencia Debida, dicha ley “Reconocía tres clases de responsabilidad frente a los delitos de lesa humanidad y genocidio acaecidos en nuestro país entre 1976 y 1983: a) Los que dieron la orden de matar, eran responsables; b) los que se limitaron a cumplirla porque obraron (...) bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de ordenes (...) no son responsables y c) Los que cumpliendo las ordenes, se excedieron cometiendo delitos de violación, (...) no les alcanza el beneficio del apartado b).”¹¹⁷

Leyes que como ya se dijo, beneficiaban a los individuos responsables de homicidios, violación de DH y crímenes de lesa humanidad. Como punto relevante en materia de DH en la presidencia de Raúl Alfonsín es posible destacar que Argentina del 1984 es Estado Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Para 1991 el país se encontraba en un intento de salida de la crisis económica, al mando del presidente Carlos Menem.

En materia de DH el país aún se encontraba con el rezago dejado por la dictadura militar, los recuerdos de las desapariciones, secuestros y torturas se encontraban presentes en la población. A más de la presión ejercida por los militares a raíz de lo realizado por Alfonsín en su contra. Para Menem su idea de paz dentro de la comunidad argentina era la de “cerrar heridas y cicatrizar definitivamente un pasado que no le hace bien al país” (el clarín, 26/05/1989).

Menem en su idea de “clausurar el pasado” firmó indultos, satisfaciendo la demanda política de los militares, con el fin de evitar nuevos pronunciamientos de los mismos logrando un disciplinamiento social por parte de las Fuerzas Armadas. (FAÍR, 2011). Con estas acciones buscando unidad y pacificación nacional.

Además se puede evidenciar jerarquía constitucional que adquirió el Protocolo Contra la Tortura en 1994; siendo el país “el primero en Latinoamérica en ratificar el Protocolo a la Convención contra la tortura (...) fruto de la incesante trabajo del Estado argentino en su política de ampliación de derechos y su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”¹¹⁸

¹¹⁶ <http://www.terreleyasociados.com/estudio/derecho/LA%20OBEDIENCIA%20DEBIDA%20Y%20PUNTO%20FINAL.doc>, (visitado, 16/11/2014).

¹¹⁷ *Ibíd.*

¹¹⁸ <http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/reglamentaron-el-mecanismo-de-prevencion-contra-la-tortura-3723.html>, (visitado :07/10/2014).

2.2.2 Accionar del Estado.

El 19 de noviembre de 1991, el Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de La Plata, “legaliza” la captura arbitraria de Juan Carlos Bayarri y ordena su detención. Dicha decisión se dictó por exhorto del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 25, el cual investigaba el delito de privación ilegítima de la libertad de Mauricio Macri. El 20 de noviembre de 1991, Bayarri fue trasladado al Departamento Central de Policía. (OEA, CIDH, 2001).

El 23 de diciembre de 1991, el apoderado judicial del peticionario formuló una denuncia penal por los delitos de detención ilegal y apremios ilegales en perjuicio de Juan Carlos Bayarri. La causa se inició en el Juzgado de Instrucción N° 13. (OEA, CIDH, 2001).

El abogado de Bayarri fundamenta los alegatos de tortura basado en los testimonios del personal médico que de manera directa tuvieron conocimiento de su caso, así como en la naturaleza del tratamiento que le fue prescrito. Lamentablemente el expediente médico elaborado el 29 de noviembre de 1992, en el cual se registró una lesión timpánica como producto de las torturas, desapareció. (OEA, CIDH, 2001).

El 11 de septiembre de 1996, el Juez de Primera Instancia decidió “sobreser provisionalmente” la causa, respecto de los delitos de privación ilegítima de la libertad y por apremios ilegales.¹¹⁹

La peticionario interpuso una solicitud de excarcelación después de 58 meses de detención preventiva y fue denegada por el juzgado de Primera Instancia el 12 de septiembre de 1996. Dicha resolución considera que “la situación del procesado Bayarri, no sólo no ha variado sustancialmente, sino que encontrándose la causa en condiciones de recibirse a pruebas, puede vislumbrarse la conclusión de la misma y en consecuencia, no se justifica su libertad anticipada”. Esta decisión fue confirmada el 31 de octubre de 1996 por el Tribunal de Segunda Instancia, con fundamento de que las características del ilícito, las condiciones personales del procesado y el monto

¹¹⁹ El apremio ilegal se produce cuando un funcionario público, haciendo abuso de sus funciones o autoridad, o sin cumplir con las formalidades indicadas por la ley, priva a alguien de su libertad personal, o aplica cualquier tipo de vejamen y/o tormentos. Es la forma eufemística de la tortura que funciona, precisamente, "para tolerarla", utilizada así para no aplicar otros tipos penales más comprometedores políticamente. En: <http://policia-local-wakinaki.com/2013/04/01/apremios-ilegales/> (visitado: 20/06/2014).

de la pena requerido en la acusación fiscal, “llevan a presumir con fundamento que de otorgarse su libertad por esta vía eludiría la acción de la justicia”. (OEA, CIDH, 2001).

La cuarta solicitud de excarcelación fue presentada el 9 de enero de 1997 fue rechazada por el Tribunal de Primera Instancia al día siguiente. El 6 de marzo de 1997, la Cámara de Apelaciones correspondiente confirmó la decisión del tribunal. (OEA, CIDH, 2001).

El 1 de abril de 1997, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones revocó la decisión anterior en lo referente a Juan Carlos Bayarri y advirtió que la gravedad de los hechos denunciados “requieren profundizar la investigación emprendida, la que dista de estar agotada”, y en consecuencia, ordenó al juez instructor realizar una serie de pruebas. Esto al considerar que el implicado, por medio de su confesión, era culpable y podía representar un peligro contra la sociedad (OEA, CIDH, 2001).

El Sr. Bayarri señaló que llevaba más de nueve años inculcado por diversos delitos de secuestro y torturas ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 sin que haya sentencia definitiva. Señaló, que el 11 de agosto de 1999 presentó alegatos y hasta la fecha de los informes presentados no se ha dictado sentencia. (OEA, CIDH, 2001).¹²⁰

2.2.3 Petición de la víctima ante la CIDH.

El Sr. Bayarri denunció que fue detenido arbitrariamente el 18 de noviembre de 1991 sin orden judicial y fue sometido a torturas. Al examinar el presente caso la Comisión concluye que tiene competencia para conocerlo; en este contexto el señor Bayarri nombra como sus representantes a los Abogados Carlos A.B. Pérez Galindo y Cristian Pablo Caputo. (OEA, CIDH, 2001).

Desde 1994 hasta el 2000 tanto el Estado como los representantes de la víctima presentaron observaciones, información adicional, donde se presentaron prorrogas por parte del Estado, para de esta manera llegar a la aprobación del caso por parte de la CIDH. Para una mejor comprensión véase el anexo 7.

¹²⁰ Para mayor comprensión ver anexo 6.

El caso entró a la CIDH bajo la aprobación del Informe No. 02/01, declarando admisibles los fundamentos contenidos en relación a las presuntas violaciones de los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención.¹²¹

2.2.4 Tratamiento dado por la CIDH.

El 17 de abril de 2001, la CIDH se puso a disposición de las partes a fin de facilitar una solución amistosa: sin embargo el estado no dio respuesta alguna en cuanto a la propuesta de iniciar un proceso de solución amistosa. El 15 de junio de 2001, el Sr. Bayarri advirtió la nula disposición por parte del Estado para iniciar un proceso de solución amistosa y presentó información adicional sobre el caso, remitiendo dicha información a la CIDH el 20 de julio de 2001 (OEA, CIDH, 2007), misma que se dio a conocer al Estado el 17 de octubre de 2001. (OEA, CIDH, 2007).

El 27 de agosto de 2001, se informó a las partes que la CIDH les concedió una audiencia el 15 de noviembre de 2001, en dicha audiencia participaron ambas partes. Durante la misma, el Estado presentó información adicional sobre el caso, de dicha información, se comunicó al Sr. Bayarri el 20 de noviembre de 2001. (OEA, CIDH, 2007). En dicha audiencia no se llegó a un acuerdo de solución amistosa.

Del 20 de noviembre del 2001 al 14 de marzo del 2006 ambas partes presentaron información adicional, notificando la CIDH en cada caso a cada una de las partes involucradas.

La CIDH adoptó su informe N° 02/07 sobre el Fondo del caso el 8 de marzo de 2007. En él la CIDH concluyó que el Estado de Argentina es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal (artículo 5), a la libertad personal (artículo 7), a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25) en relación al Sr. Bayarri. En consecuencia, la CIDH formuló las siguientes recomendaciones:

“1. Completar la investigación de los sucesos que tuvieron lugar mientras el Sr. Bayarri estuvo bajo custodia, detallar en un informe oficial, las circunstancias y la responsabilidad por las violaciones señaladas en el presente informe.

2. Tomar las medidas necesarias para someter a las personas responsables de los hechos de detención arbitraria, tortura y denegación de justicia.

¹²¹ Ver anexo 7.

3. Reparar las violaciones establecidas, y asegurar que el Sr. Bayarri reciba una justa compensación que tome en cuenta las consecuencias físicas y psicológicas referidas en el informe.

4. Prevenir que tales violaciones ocurran en el futuro, respetar y asegurar los derechos establecidos en la Convención” (OEA, CIDH, 2007, p. 49).

El 16 de abril de 2007 la CIDH transmitió el Informe de Fondo, en el cual está explicado el proceso realizado y las conclusiones a las cuales se llegó, teniendo un plazo de dos meses para adoptar las recomendaciones en él expuestas.. La CIDH notificó al Sr. Bayarri la adopción del informe y su transmisión al Estado y le solicitó su posición respecto del eventual sometimiento del caso a la CorteIDH.

El 15 de junio de 2007 el Estado remitió un informe en el que manifestó que los hechos denunciados por el Sr. Bayarri se encuentran bajo investigación, que el señor Bayarri “no ha interpuesto demanda contra el Estado Nacional en procura de una indemnización por los daños y perjuicios que alega habría padecido y que se encuentra en estudio un proyecto de ley tendiente a la implementación de un mecanismo de prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (OEA, CIDH, 2007), razón por la que el Estado estipula que no se han agotado los recursos internos, más para la CIDH eso ya ocurrió.

El señor Bayarri, como ya se señaló antes, alegaba que desde que fue puesto en prisión ha presentado más cuatro solicitudes de excarcelación, siendo la última presentada el 11 de agosto de 1999, sin que exista sentencia alguna de la misma; el Estado argentino no dio cabida, o hizo caso omiso a las peticiones del Sr. Bayarri, dejando el caso abierto, por lo cual la CIDH considera que el caso agotó los recursos internos, y dispuso las recomendaciones hacia el estado. (OEA, CIDH, 2007).

Además, el alegato del Estado sobre la falta de agotamiento de recursos internos resulta extemporáneo, ya que no fue interpuesto sino hasta después del Informe de admisibilidad. En consecuencia, el Estado renunció en forma tácita a presentar esta defensa en el momento oportuno. (OEA, CIDH, 2007).

El Sr. Bayarri, el 15 de junio de 2007, expresó su voluntad de que el caso fuera sometido a la CorteIDH. (OEA, CIDH, 2007).

El 16 de julio de 2007, ante la falta de adopción satisfactoria de las recomendaciones por parte del Estado, la CIDH decidió someter el caso a la CorteIDH.

2.2.5 Remisión a la CorteIDH.

“La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana, toda vez que Argentina desde el 5 de septiembre de 1984 es Estado Parte en la Convención y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte esa misma fecha.” (OEA, CorteIDH, 2008).

El 16 de julio de 2007, la CIDH sometió a la CorteIDH una demanda en contra de la República Argentina, la que se originó en la denuncia presentada el 5 de abril de 1994 por el señor Juan Carlos Bayarri. “En razón de que la CIDH consideró que el Estado no había adoptado sus recomendaciones de manera satisfactoria”¹²². La misma se encontraba integrada por los siguiente jueces: Cecilia Medina Quiroga (Chile), Presidenta; Diego García-Sayán (Estados Unidos), Vicepresidente; Sergio García Ramírez (México), Juez; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), Juez; Margarette May Macaulay (Jamaica), Jueza, y Rhadys Abreu Blondet (República Dominicana), Jueza. (OEA, CorteIDH, 2008).

La demanda de la CIDH se relaciona con la alegada detención ilegal y arbitraria del Sr. Bayarri el 18 de noviembre de 1991, su supuesta tortura, prisión preventiva excesiva y subsiguiente denegación de justicia. (OEA, CorteIDH, 2008).

El 17 de octubre de 2007 los abogados representantes del Sr. Bayarri, presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas ante la Corte. Además de reiterar lo alegado por la CIDH, los representantes manifestaron, que “el daño provocado por mantener a la presunta víctima casi 13 años injustamente privada de su libertad pese a ser totalmente inocente, produjo además de los daños y perjuicios provocados y desencadenados en su contra [...], graves y tremendas consecuencias adicionales sobre su familia.”¹²³ (OEA, CorteIDH, 2008).

La recepción de la demanda fue notificada al Estado y a los representantes el 28 de agosto de 2007. Además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes, la presidenta de la CorteIDH ordenó recibir, las declaraciones de testigos ofrecidos por los representantes,¹²⁴ así como de peritos ofrecidos por el

¹²² La recomendación acatada fue la prevención de las violaciones a futuro, con la ley hacia la prevención de la tortura.

¹²³ Especialmente consecuencias psicológicas para su familia, al tener un familiar torturado y en prisión los afectó gravemente, además de no contar con su aporte económico de parte del Sr. Bayarri.

¹²⁴ Tanto el Médico Dr. Luis Eduardo Garre, declara sobre las consecuencias físicas para el señor Juan Carlos Bayarri de su privación ilegal y arbitraria de libertad y de su tortura, así como la falta de una respuesta judicial apropiada por las violaciones cometidas en su contra, como la psicóloga Dra. María

Estado. Además ordenó al Estado la presentación de copias legibles y completas de expedientes judiciales y administrativos relacionados con el presente caso, como prueba para resolver mejor. (OEA, CorteIDH, 2008).

El 28 de diciembre de 2007 el Estado presentó su escrito de excepción preliminar, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos relacionada con la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos. El Estado solicitó a la CorteIDH que rechace “la pretensión reparatoria exteriorizada ¹²⁵ por los representantes, y que (...), determine las eventuales reparaciones debidas al señor Juan Carlos Bayarri”. Los representantes solicitaron al Tribunal que rechace la excepción preliminar interpuesta por el Estado. (OEA, CorteIDH, 2008).

En consideración de las circunstancias particulares del caso, la Presidenta de la CorteIDH convocó a la CIDH, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de la presunta víctima y de dos peritos, así como los alegatos finales orales de las partes; la audiencia pública fue celebrada el 29 de abril de 2008, llevado a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. (OEA, CorteIDH, 2008).

Al final de dicha audiencia los jueces solicitaron al Estado y a los representantes que presentaran sus alegatos finales por escrito. Dicha solicitud fue dada al Estado y a los representantes del señor Bayarri el 7 de mayo del 2008.

El 15 de julio del 2008 el Estado admite la culpabilidad de los hechos que se le perpetraron, así la CorteIDH, con base en los hechos establecidos en la demanda y los hechos presentados por los representantes, realizó las acciones correspondientes dentro de estándares internacionales aplicables. (OEA, CorteIDH, 2008).

Conforme las pruebas presentadas por las partes y los hechos acontecidos, la CorteIDH resuelve, conforme al artículo 63 de la Convención Americana, que “cuando resuelva que existió violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, la CorteIDH garantizará el goce de los derechos o libertades transgredidos. Dispondrá que se reparen las consecuencias de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”¹²⁶ que: la parte lesionada, el Sr.

del Carmen Pérez, declara sobre las consecuencias psicológicas para el señor Juan Carlos Bayarri, de su privación ilegal y arbitraria de libertad y de su tortura, así como la falta de una respuesta judicial apropiada por las violaciones cometidas en su contra.

¹²⁵ Reivindicación de los daños causados.

¹²⁶ Cfr. Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 63.

Bayarri, es acreedor a las reparaciones que se fijen dentro del Tribunal¹²⁷, además de las reparaciones al Sr. Bayarri, la Corte ordenó al gobierno argentino la administración y capacitación de sus fuerzas judiciales, para que crímenes como estos no vuelvan a suceder” (OEA, CorteIDH, 2008).

2.2.6 Accionar del Estado posterior a las decisiones de la CorteIDH.

Por motivo de indemnizaciones la CorteIDH decide, por unanimidad, que: en concepto de indemnización por daño material:

“Tribunal no puede cuantificar con precisión el monto que el señor Bayarri ha erogado. (...) el Tribunal fija en equidad la suma de US \$18,000.00 que deberán ser cancelados por el Estado al señor Bayarri por concepto de reembolso por gastos en atención médica y psicológica. (...) además la Corte estima fijar una indemnización que comprenda los gastos futuros por tratamiento psicológico. (...) la Corte considera razonable entregarle la cantidad de US \$22,000.00.” (OEA, CorteIDH, 2008 p. 44).

Asimismo, por pérdida de ingresos y otros gastos la CorteIDH fijó:

“que el Estado debe entregar la suma de US \$50,000.00 al señor Bayarri, por concepto de indemnización por los ingresos que dejó de percibir durante los trece años que estuvo privado de su libertad (...) la devolución del monto secuestrado en el allanamiento y al ser detenido el señor Bayarri. Dicho monto ascendería a US \$2,113.00, y por tiempo transcurrido desde el secuestro del dinero y el perjuicio económico que en consecuencia se causó al señor Bayarri, por lo que decide otorgar, en equidad, la cantidad total de US \$5,000.00.” (OEA, CorteIDH, 2008, p. 46-47).

A más de los daños materiales causados, “la CorteIDH considera pertinente fijar en equidad la suma de US \$100,000.00 como compensación por los daños inmateriales que las violaciones de los derechos humanos declaradas en esta sentencia causaron al señor Bayarri.” (OEA, CorteIDH, 2008, p. 50).

Posteriormente a las decisiones tomadas por la CorteIDH, el Estado Argentino, por orden de la CorteIDH, como medida de satisfacción, debe publicar en el diario oficial nacional y en otros dos diarios de amplia circulación nacional, por una sola vez la sentencia dada.

En dos diarios del Estado Argentino se publicó:

En el periódico “el Perfil” se publicó:

“Las sospechas del caso recayeron sobre una banda integrada por policías. Juan Carlos Bayarri, ex sargento, estuvo preso 12 años, 6 meses y 5 días, hasta que en 2005 la Cámara Federal porteña determinó que había sido torturado y lo sobreseyó.

¹²⁷ Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tras haber sido sobreseído, Bayarri reclamó una compensación económica. Como no la obtuvo, demandó al Estado ante la CIDH, que sentenció que el Estado argentino violó los derechos de libertad e integridad personal, e "incumplió su obligación de investigar con la debida diligencia la tortura a la que fue sometido el señor Juan Carlos Bayarri" (...)y fijó una indemnización de 297 mil dólares, por daños y prejuicios, para el comisario Juan Carlos Bayarri.”¹²⁸

Mientras que en el periódico “El Clarín” se publicó siguiente:

“El fallo supone un grave llamado de atención para el país. No tanto por el monto de la condena, de 297.000 dólares por daños y perjuicios, sino porque este tipo de sentencias no son frecuentes. Y, además, esta vez la Corte fue más allá de caso puntual e hizo una observación general: le ordenó al Gobierno que capacite a sus fuerzas de seguridad, investigación y administración de justicia en "actividades de difusión y formación sobre la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”¹²⁹

El Estado Argentino, tras el fallo de la CorteIDH cumplió con las demandas presentadas y acató con lo estipulado en las resoluciones de la CorteIDH.

La situación de los DH en Argentina tuvo una gran mejoría y fueron más resguardados y mejor encaminados los lineamientos para la protección de los mismo. Esto se puede ver en las leyes que cambiaron, ya que antes del 2005, sobretodo durante la dictadura militar, existían leyes tales como la de punto final y obediencia debida, “la ley 23.492 (Punto Final) y la ley 23.521 (Obediencia Debida) que establecían la impunidad (extinción de la acción penal y no punibilidad) de los delitos cometidos en el marco de la represión sistemática.”¹³⁰

Estas leyes, cuando se encontraban en vigencia se oponía a principios jurídicos que se encontraban universalmente reconocidos. Estas leyes fueron “anuladas por la Corte Suprema el 14 de junio de 2005 utilizando la figura de Crímenes contra la humanidad”¹³¹

Dichas anulación de leyes es de carácter retroactivo, es decir, las personas que salieron libradas de una condena apelando a estas leyes, se encuentran en la posibilidad de ser investigadas y sancionadas por el Estado.¹³²

A pesar de la inestabilidad económica de 2001, Argentina crea el Comité Contra la Tortura en año 2002, cuyo objetivo es “monitorear lugares de detención y

¹²⁸ <http://www.perfil.com/politica/El-Estado-argentino-debera-indemnizar-a-uno-de-los-secuestradores-de-Macri-por-violar-derechos-humanos-20081203-0013.html>, (visitado: 06/05/2014)

¹²⁹ <http://edant.clarin.com/diario/2008/12/03/elpais/p-01814731.htm>, (visitado: 06/05/2014)

¹³⁰ Centro de estudios legales y sociales. Leyes de punto final y obediencia debida son inconstitucionales, pág. 2. (2005).

¹³¹ <http://www.derechos.org/nizkor/arg/> (visitado:03/09/2014).

¹³² Cfr. Centro de estudios legales y sociales, pág. 7.

prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.” (PEREZ, Adolfo, 2008), acciones que intentaban remediar los hechos causados anteriormente y solucionar los problemas que había tenido el país con la tortura.

De esta manera es posible evidenciar un gran avance en materia de DH dentro del estado argentino, intentando reivindicar su accionar benevolente ante las personas que cometieron violaciones de DH y que salieron libres de su culpa.

2.3 Comparación de casos.

Los dos casos expuestos muestran similitudes en la violación de los derechos humanos dentro de sus países, ambos violan los DH de primera generación, explicados en la primera parte, porque, tanto en el caso argentino como en el ecuatoriano las víctimas son privadas ilícitamente de la libertad. Diferenciándose en que, mientras el caso ecuatoriano se da por narcotráfico, el caso argentino se da por la investigación de un secuestro.

En el caso ecuatoriano las acciones perpetradas se enmarcan en una lucha contra el narcotráfico, lo que derivó en la acusación equivocada a personas que no tenían relación con dicho delito. Las investigaciones realizadas dentro del país mostraron la inocencia de los señores Lapo y Chaparro, esto después de ser privados de la libertad y violar sus derechos.

En el caso argentino el accionar se da por motivo de la lucha contra el crimen organizado, entre este, el secuestro de una persona importante; la investigación realizada derivó en la captura del señor Bayarri, obligándolo a confesar acciones que no cometió, sometiéndolo a torturas y a la privación de la libertad. Las investigaciones dadas dentro del país evidenciaron que el señor Bayarri no era culpable de los delitos inculcados.

La situación de DH dentro del estado ecuatoriano no estaba marcada por abusos de poder ni desapariciones ni secuestros como en el estado argentino; pero la inculpación ilícita, en el caso ecuatoriano, se da a razón de la lucha contra las drogas, que estaba tomando fuerza¹³³ en el país; el accionar desmedido de la fuerza estatal, en el caso argentino, es un rezago de los diferentes tipos de procedimientos que se realizaban en el país, especialmente en la época de la dictadura, los cuales afectaron

¹³³ Tomaba fuerza por las luchas que se daban a nivel internacional contra las drogas, liderando esta lucha los Estados Unidos.

fuertemente a la población en materia de DH, procedimientos que involucraban secuestros, tortura y desapariciones. Esto trajo como consecuencia demandas por parte de los individuos violentados ante organizaciones internacionales, en este caso de la CIDH.

En los dos casos se puede vislumbrar el accionar equivoco del Estado, lo cual derivó en violación de DH, a pesar de que los dos países tenían diferente tratamiento con los individuos inculcados, las violaciones a los DH ocurrieron por igual, siendo en el caso argentino más agravado por las torturas cometidas al Sr. Bayarri.

El procedimiento realizado al momento de las inculpaciones, junto con el proceso de investigación por parte de los estados y de la CIDH; el reconocimiento de la culpabilidad del Estado, la disculpa pública, la publicación y cumplimiento de la sentencia emitida por la CorteIDH son aspectos similares dentro del procedimiento de los dos casos.

El accionar dentro de la CIDH en los casos tiene similitudes; en los dos casos se violaron derechos básicos y fueron aceptados por la CIDH para ser investigados, y se puso a conocimiento de las partes las decisiones de la misma, la CIDH en ninguno de los dos casos solicitó que las medidas cautelares sean adoptadas por los Estados. Los dos fueron presentados ante la CIDH cuando según los implicados se habían agotado los recursos internos, pero según los países eso no había ocurrido.¹³⁴ Ambos casos optaron en principio por una solución amistosa, pero esto no sucedió, ya que no cubría con las demandas de las víctimas. Finalmente en los dos casos, las víctimas solicitaron a la CIDH que el caso sea sometido a las CorteIDH, en el caso de los señores Chaparro y Lapo solicitaron el sometimiento a la CorteIDH a razón de que: “consideran que ésta sería la única instancia para hacer justicia por las graves violaciones a sus derechos humanos” (OEA, CIDH, 2006, p. 6); además el señor Bayarri manifestó su voluntad de que su caso sea sometido a la CorteIDH.

Además del accionar a nivel internacional, existe el accionar interno que cada uno de los Estados. Las acciones tomadas por cada Estado, como está explicado antes (en los puntos 2.1.6 y 2.2.6), intentan remediar en cierta medida las fallas cometidas dentro de sus fronteras, esto con la implementación de nuevas leyes, normas, planes

¹³⁴ En la no aceptación del agotamiento de recursos internos de los estados existe una similitud marcada, ya que los dos estados alegan que aún existen procedimientos por los cuales las víctimas deben pasar para que los recursos se agoten, mas la CIDH considera que estos ya fueron agotados. Finalmente, los estados terminan aceptando en agotamiento de dichos recursos, esto a razón de la fáctica terminación de los mismos.

que permitan mejorar el tratamiento dado por la fuerza pública dentro de sus fronteras.

Entre las diferencias que podemos encontrar dentro de los casos expuestos es: la relativa agilidad de un proceso en comparación con el otro, mientras el caso ecuatoriano el proceso dentro de la CIDH duró de siete años, el caso argentino pasó por un proceso de trece años; mientras los señores Chaparro y Lapo estuvieron privados de su libertad por lapsos no mayores a un año y medio, el señor Bayarri se mantuvo recluso por trece años.

Esto se da por que las acciones dentro de los estados fueron diferentes, mientras en el estado ecuatoriano los Srs. Chaparro y Lapo pasaron por un proceso de juzgamiento relativamente rápido, el Sr. Bayarri, del caso argentino, debido a las leyes, normas y a la causa de su encarcelamiento¹³⁵ tuvo un proceso mucho más lento, lo cual alargó su tiempo en prisión.

Esto muestra la diferencia en el accionar interno en cada uno de los países, a más de la aplicación de las medidas establecidas dentro de la CIDH. La diferencia entre el proceso interno de cada país y el sometimiento a las instancias internacionales marca la diferencia entre los casos.

Finalmente los dos casos fueron remitidos a la CorteIDH, siendo sentenciados a cumplir con las reparaciones y reconocimientos estipulados por la mismas, siendo en este punto los dos estados iguales en el tiempo de cumplimiento, ya que se demoraron alrededor de un año en cumplir con las reparaciones que sentenciaba la CorteIDH.

¹³⁵ El secuestro del señor Macri, una persona muy influyente en Argentina.

Capítulo 3

3. Conclusiones.

El presente trabajo partió de una pregunta ¿Cuáles son las diferencias y similitudes en torno al accionar del Estado ecuatoriano ante el caso de Juan Chaparro y Freddy Lapo, y del Estado argentino en relación al caso de Juan Bayarri, frente a las sentencias emitidas por parte del RRDH en América?. El objetivo que se perseguía era realizar una comparación entre las acciones de los Estados ecuatoriano y argentino frente a dos casos en esencia similares, pero diferentes en la práctica, e identificar las brechas entre la teoría y la práctica dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En ese contexto, se dividió la investigación en dos capítulos. En el primero se abordaron los conceptos básicos de estado y regímenes internacionales, su composición, vinculación, estructura y aplicación dentro de las diferentes regiones en el plano internacional. Con este objetivo se identificaron las diferentes teorías existentes acerca de los regímenes internacionales y se escogieron dos para realizar la investigación.

El primer capítulo sirve de base para la articulación del segundo, ya que permite tener una observación amplia de la acción de los estados, la formación de los regímenes internacionales, sus funciones y principales características. A la vez nos hace obtener un contexto general de los regímenes de derechos humanos, su accionar en cada uno de los diferentes regiones y su diferencia estructural con el régimen americano. Y, dentro del régimen americano, en base al análisis realizado en el segundo capítulo, se logró identificar el accionar de la CIDH y de la CorteIDH, verificando su cumplimiento en el accionar, en el dictamen de sentencias y en el cumplimiento por parte de los estados de las reparaciones estipuladas.

De este capítulo queda claro que, según los lineamientos de Donnelly y Young, no existe un régimen absolutamente eficaz en las categoría de promoción,

ejecución, protección e implementación de los DH y, además, que el factor político fue la traba más fuerte para su total y completo desarrollo.

El hecho de que tanto el régimen europeo como el americano tienen un nivel de desarrollo y cohesión más amplio y fundamentado permite una mejor aplicación de las normas internacionales de DH, a diferencia del régimen africano, el cual intenta fundamentar su aplicación en aquellos dos regímenes. Por su parte, la liga de países Árabes y el régimen de Sureste Asiático tienen una unión económica fuerte, pero su nivel de unión a nivel de DH está en proceso de consolidación y avance.

La segunda parte incluye la explicación de los casos escogidos. Con esta finalidad da cuenta del contexto histórico y de la situación de los DH de los respectivos países, realiza un recuento cronológico de las actividades que sucedieron dentro de los casos estudiados y analiza el accionar de los estados en relación a las acciones cometidas.

Dentro de la investigación se pudo ver la marcada brecha que existe entre los acuerdos a los que los países llegan y las acciones de facto que realizan al momento de cumplir con lo acordado. El reglamento de la Convención Americana, y los de la CIDH y la CorteIDH son vulnerados y violentados en muchos aspectos,. Se llega incluso a irrespetarlos y se deja de lado los puntos acordados en un momento determinado. Esta situación se ve reflejada en la investigación, puesto que, en principio, las acciones cometidas por los Estados iban en contra de lo firmado y ratificado dentro de la Convención Americana (tal vez por desconocimiento de los individuos). Posteriormente, al darse las recomendaciones de la CIDH, los Estados cumplían con ellas parcialmente. Por tal causa hubo la necesidad de recurrir a la CorteIDH para que los casos sean resueltos y las decisiones acatadas en su totalidad.

En sí, los estados no son los actores directos en las violaciones de los DH los verdaderos perpetradores de las violaciones son individuos, ya sea uno o un grupo; que, ante el desconocimiento de las leyes, normas y reglas internacionales, realizan sus acciones, sin tener en cuenta que estas podrían afectar negativamente al Estado. Dichos individuos son funcionarios públicos¹³⁶, quienes, al ser parte del aparato estatal, actúan en su nombre, y abren la posibilidad de que se dé una sanción directa

¹³⁶ En el caso de investigación, policías y jueces.

para al Estado¹³⁷, el cual se hace responsable por las acciones cometidas por sus funcionarios dentro de su territorio.

Como se vio en el primer capítulo, los regímenes son un conjunto de normas y reglas, a las cuales los estados se adhieren voluntariamente. El régimen americano fue caracterizado como promocional, de ejecución y de puesta en práctica fuerte. Este hecho permite que sus tribunales tengan la capacidad de emitir fallos obligatorios y vinculantes.

A pesar de que el régimen americano posee varios tratados como la Convención Americana, tiene instancias que no son estrictamente vinculantes, tales como la CIDH, cuyos dictámenes pueden ser vulnerados o pasados por alto por parte de los países firmantes; pero, como se vio en la caracterización de la CorteIDH, su reglamento es de obligatorio cumplimiento para los Estados que aceptaron su competencia.

En los dos casos analizados es posible evidenciar la brecha teórico-práctica, ya que en ambos se hizo caso omiso a las recomendaciones dadas por la CIDH, de manera que la CorteIDH tuvo que encargarse de dictar sentencia contra los Estados, para exigir que los derechos de las personas sean respetados y sus exigencias cumplidas, por medio de lo dictamen. No obstante, la CIDH cumple un rol fundamental. En efecto esta tiene la capacidad de proteger a las personas que se hallan en riesgo dentro de sus países por medio de las medidas cautelares¹³⁸. Además, ella es la primera instancia de investigación y deliberación sobre los casos de violación de DH del SIDH, y protege y vigila el cumplimiento de la protección de los DH en la región y permite que el trabajo de la Corte se agilice.

Dentro de su dictamen, la CorteIDH garantiza las medidas de indemnización y de satisfacción, dentro de las cuales se encuentran las de restitución, de rehabilitación, de satisfacción y las de no repetición, así como la obligación de investigar y sancionar por parte del estado.¹³⁹

Las sentencias dictadas por la CorteIDH se encuentran mediadas por factores de cumplimiento relativos a cada país y para la misma Corte. Esta, por un lado posibilita un lapso para que el país cumpla con la sentencia establecida, el cual

¹³⁷ Por parte de, en este caso, la CIDH o la CorteIDH.

¹³⁸ Que aunque aquí no fueron aplicadas en otros casos sirven para precautelar la vida de las víctimas si estas se vieran en peligro.

¹³⁹ Reglamento Corte Interamericana de Derechos Humanos. Capítulo VI.

estipula niveles de incumplimiento o de cumplimiento a medias de los establecido.

Una dificultad clara por parte de los Estados para cumplir con las reparaciones es el motivo económico, en vista de que, en primer, lugar la mayoría de las sentencias establecen una reparación económica para las víctimas. En segundo lugar, los Estados no cuentan con el dinero inmediatamente. Este hecho constituye una dificultad para su inmediato cumplimiento y genera un ambiente de desconfianza entre el Estado, la Corte y la víctima.

Otro factor que influye en el cumplimiento de las sentencias podría ser el clima político existente dentro del Estado al momento del dictamen de la sentencia. El Estado puede verse bajo un gobierno estable y con fuerte tendencia al cumplimiento de los DH. Esta situación beneficiaría completamente al accionar y cumplimiento de lo estipulados o, por otro lado, el gobierno de turno puede no acatar las exigencias de la CorteIDH y retrasar el cumplimiento de la sentencia.

Como se puede ver en los anexos 8 y 9 es posible evidenciar que en una parte los dos estados no cumplen las recomendaciones de la CIDH. Tal modo de actuar muestra una falencia dentro de este organismo ya que, como ya se dijo, al no ser vinculante en sus recomendaciones, los estados no se ven en la obligación de acatarlos ni de someterse a ellos; cosa que no sucede cuando los casos son remitidos a la CorteIDH, ya que las decisiones tomadas por esta se cumplen por parte de los estados, después de un tiempo prudencial.

Además es posible evidenciar que la CorteIDH no se encuentra sometida a la CIDH; pues, las resoluciones de la misma no implican una sentencia necesaria de la Corte, como se evidencia en el caso Marco Bienvenido contra Ecuador a pesar de que la CIDH remitió el caso a la CorteIDH, esta declaró que no habría existido violación de DH y por tal razón el estado quedó absuelto.

Alrededor de la CIDH, y la CorteIDH existe una gran cantidad de casos. No todos son admitidos por la CIDH ya que, no cumple con las condiciones necesarias para que ello, mientras que otros casos no son enviados a la CorteIDH y son resueltos dentro de la misma CIDH.

En virtud de lo analizado en la tesis, se concluye que el Régimen

Interamericano de Derechos Humanos realiza todas las labores necesarias para cumplir a cabalidad lo establecido e impulsa un constante avance de la vigencia afectiva de los DH. Dado que entre la teoría y la práctica nunca va a existir un acuerdo total, la práctica siempre va a ser deficiente respecto a las exigencias de la teoría y van a existir conflictos, especialmente en un tema tan sensible como son los Derechos Humanos y su respeto.

4. Bibliografía

Textos:

- ADOUM, Jorge. (2000). *Cronología del siglo XX: cultura y política en Ecuador y el mundo*. 2.^a ed. Ecuador: Ed. Eskeletra..
- ANAYA, A. (2010). *Los derechos humanos desde las Relaciones Internacionales: Normas, regímenes, “emprendedores” y comportamiento estatal*. México: Ed. FLACSO y CISAN-UNAM.
- BICUDO, Helio. (2003). *Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. Costa Rica: Ed. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- BOUTROS-BOUTROS-Ghali. (1984). *La Liga de estados árabes. Las dimensiones internacionales de los derechos humanos*. 3.^a ed. España: Ed. Serbal, UNESCO.
- BROWN, C. (2002). “*El régimen internacional contemporáneo de derechos humanos,*” *Soberanía derechos y justicia*, EEUU: Ed. Polity Press, Camdridge.
- CALDERÓN, María Fernanda. (2011). *Ecuador y su política de lucha contra las drogas*. Ecuador: Ed. PUCE.
- Código Procesal Penal Ecuatoriano.
- Constitución de la Republica de Ecuador, 1978.
- DIEZ DE VELASCO, Manuel. (1997). *Las Organizaciones Internacionales*. Madrid, España: Ed. Tecnos.
- DONNELLY, Jack. (2007). *International Human Rights*. EEUU: Ed. Westview Press.
- DONNELLY, Jack. (1994). *Derechos Humanos Universales, En la teoría y el la práctica*. 4.^a ed. Estados Unidos: Ed. Cornell University Press.
- FAÍR, Hernán. (2011). *Las relaciones política entre el menemismo y las Fuerzas Armadas. Un análisis histórico-político del período 1989-1995*. Argentina: Ed. KAIROS. Revista de temas sociales.
- GARCÍA, Sergio. (2003). *Las reparaciones en el sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos*. Costa Rica: Ed. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- GÓMEZ, Ruby. (2010). *Derechos individuales, colectivos y el pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Colombia: Ed. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior.
- GRIJALVA, Agustín. (2012). *¿Qué son los derechos colectivos?* Ecuador: Ed. UASB.
- GROSSMAN, Claudio. (1994). *Reflexiones sobre el sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos. En: Lecciones y Ensayos, Dossier: protección Internacional de los Derechos Humanos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Departamento de Publicaciones*. Costa Rica: Ed. UBA.
- HARRINGTON, JULIA. (2004). *The African court of human and peoples Rights*. EEUU: Ed. Cambridge University Press.
- HASENCLEVER A; METER M; VOLKER R (2004). *"Theories of international regimes*. EEUU: Ed. Cambridge University Press.
- HURRELL, Andrew. (1998). *"Power, principles and prudence: protecting Human rights in a deeply divided world"* en Time Dunne y Nicholas Wheeler, *Human Rights in world politics*. EEUU: Ed. Cambridge University Press
- KEOHANE, R. y NYE, J. (1988). *Poder e interdependencia. La política mundial en transición*. 4.^a ed. Buenos Aires, Argentina: Ed. Grupo Editorial Latinoamericano.
- KEOHANE, R. y NEY, J. (2008). *Relaciones transnacionales y políticas mundiales: Una introducción*. EEUU: The Transnational Studies Reader. Ed. Routledge.
- KEOHANE, R. (1988). *Después de la hegemonía*. 4.^a ed. Buenos Aires, Argentina: Ed. Grupo Editorial Latinoamericano.
- KRASNER Stephen. (1993). *Sovereignty, Regimes, and Human Rights*. 4.^a ed. EEUU: Ed. Princeton University Press.
- MERLE, Marcel. (2000). *Sociología de las relaciones internacionales*. Ed. Universidad Alianza.
- MORAVCSIK, A.(2000). *The origins of Human rights regimes: Democratic Delegations in postwar Europe*.
- MOREIRA, María Elena. (2000). *Derechos Humanos en la Nueva Constitución Ecuatoriana*. Ecuador: Ed. Abya Yala.

- NIKKEN, Pedro. (2003). *El estado y los particulares: entre el respeto y la garantía de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en: Justicia, Libertad y Derechos Humanos. Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante*. Costa Rica: Ed. CIDH (2003).
- NOVARO M, PALERMO, V. (2003) *Historia Argentina. La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de estado a la restauración democrática*. Argentina: Ed. Paidós.
- PACHECO, Máximo. (2003). *La competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Costa Rica: Ed. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- RIVERA, Fredy. (2012). *Política, democracia y derechos humanos en Ecuador 1998 – 2006*. Ecuador: Ed. FLACSO.
- RIVERA Fredy. (2005). “Ecuador: los bemoles de la guerra contra las drogas”, en: *Youngers, Coletta A., Rosin, Eileen. Drogas y Democracia en América Latina: El impacto de la política de Estados Unidos*. Ecuador: Ed. FLACSO.
- RUILOBA, Julia. (2006). *El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: organización y funcionamiento*. España: Ed. UNED.
- SAAVEDRA, YURIA. (2008). *El Sistema Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Prólogo*. México: Ed. UNAM.
- YOUNG, Oran. (1999). *Governance in World Affairs, International Regimes*. 4.^a ed EEUU: Ed. Ithaca: Cornell University Press.
- YOUNGERS, Coletta Y ROSSIN, Eillen. (2005). *Drugs and democracy in Latin America*. EEUU: Ed. Lynne Rienner Publishers.

Textos en internet:

- ALMIRÓN, Elodia. MONTIEL, Nury, *Derechos económicos, sociales y culturales*, en: <http://cej.org.py/desc/presentacion.html>. (Visitado: 05/04/2014).
- ALVEAR, José. *Que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, en: <http://colectivodeabogados.org/Que-es-el-Sistema-Interamericano>. (Visitado: 18/07/2014).
- CONSEP. *Guía del Ecuador. 2007* en: http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/guias/GUIA%20DE%20DROGAS%20ECUADOR%20ABRIL%202007.pdf (visitado: 07/10/2014).

- DONNELLY, Jack (1986). *International Human Rights: A Regime Analysis*.
www.jstor.com (Visitado: 18/07/2014).
- MELISH, Tara. (2003). *La protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: manual para la presentación de casos*. en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm. (Visitado: 09/05/2014).
- MURUNGI Lucyline, GALLINETTI Jacqui. En: http://www.surjournal.org/esp/conteudos/getArtigo13.php?artigo=13,artigo_06.htm.(Visitado: 15/03/2014).
- ROJAS, Laura. (2013). *¿Qué es y para qué sirve la política exterior?*, En: <http://www.laurarojash.net/que-es-y-para-que-sirve-la-politica-exterior/> (Visitado: 07/05/2014).
- WEHR, Ingrid. (2000). *Soberanía Estatal vs Justicia Universal. El caso Pinochet y la discusión sobre la extraterritorialidad de la ley*. FLACSO-Chile. En: <http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=14611>.

Páginas web:

Derechos Humanos:

- <http://www.humanrights.com/es/voices-for-human-rights/human-rights-organizations/non-governmental.html>, (Visitado: 2/02/2014).
- <http://www.amnesty.org/es/who-we-are/about-amnesty-international> (Visitado: 8/05/2014).
- <http://www.cinu.mx/onu/documentos/> (Visitado: 8/05/2014).
- <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2454/40.pdf>, (Visitado: 24/03/2014).
- <http://www.diclib.com/cgi-bin/dl.cgi?l=es&st=1&page=showid&start=0&base=alkonaeconomia&id=767&letter=A#.U62ze415Omc#ixzz35rf2js7m> (Visitado: 27/06/2014).
- http://www.nyclu.org/ion_scanner_pr_040604.html, (Visitado: 27/04/2014).
- <http://www.organojudicial.gob.pa/wpcontent/blogs.dir/8/files/2009/libros/R.J.200205.pdf>, (Visitado: 20/06/2014).
- <http://www.todo-argentina.net/historia/democracia/menem1/1991.html> (Visitado:04/05/2014).

<http://www.an-historia.org.ar/Zimmermann> (Visitado: 20/06/2014).

<http://policia.localwakinaki.com/2013/04/01/apremios-ilegales/> (Visitado: 10/06/2014).

Organización de Estados Americanos:

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm (Visitado: 20/03/2014).

http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp. (Visitado: 09/05/2014).

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm#ch1, (Visitado: 24/08/2014).

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp>, (Visitado: 20/03/2014).

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/funciones.asp>, (Visitado: 18/06/2014).

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/24.estatuto%20comision.pdf>, (Visitado: 24/03/2014).

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp>, (Visitado: 20/04/2014).

<http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/historia-de-la-corteidh>, (Visitado: 18/06/2014).

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm (Visitado: 24/03/2014).

http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/ene_2009_esp.pdf (Visitado: 09/05/2014).

Caso Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Iñiguez:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe N° 77/031 peticiones 12.091 y 172/99 admisibilidad Juan Carlos Chaparro Álvarez Freddy Hernán Lapo Iñiguez Ecuador 22 de octubre de 2003.

Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante La Corte Interamericana De Derechos Humanos en el Caso de Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Iñiguez (Caso 12.091) contra la República de Ecuador, (2006).

Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, sentencia de 21 de noviembre de 2007. (2007).

Caso Juan Carlos Bayarri:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe nº 02/01. Caso 11.280 Juan Carlos Bayarri. Argentina. (2001).

Organización de los Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Juan Carlos Bayarri (Caso 11.280) contra la República Argentina. (2007).

Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Juan Carlos Bayarri vs. Argentina, sentencia de 30 de octubre de 2008. (2008).

Consejo Europeo:

<http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/> (Visitado: 08/05/2014).

<http://www.european-council.europa.eu/the-institution?lang=es> (Visitado: 25/03/2014).

http://www.echr.coe.int/Documents/court_in_brief_spa.pdf, (Visitado: 17/02/2014).

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf, (Visitado: 25/03/2014).

Organización de la Unión Africana:

<http://www.african-court.org/en/index.php/2012-03-04-06-07-42/activity-reports>, (Visitado: 12/05/2014).

Liga de países Árabes:

<http://unmultimedia.org/radio/spanish/detail/109620.html>, (Visitado: 27/02/2014).

Régimen del Sureste Asiático:

<http://aichr.org/press-release/aichr-representatives-met-for-the-first-time-with-the-asean-commission-on-the-promotion-and-protection-of-the-rights-of-women-and-children/>, (Visitado: 9/5/2014).

http://www.aseanfoundation.org/index2.php?main=priorities_area.htm, (Visitado: 9/05/2014).

Periódicos:

<http://www.eluniverso.com/2008/02/04/0001/8/2F4D9C5B1EAC4E3D866572D43277FD3F.html> (Visitado: 3/04/2014).

<http://www.lanacion.com.ar/334135-lo-que-nunca-se-dijo-del-secuestro-de-macri>, (Visitado: 29/06/2014).

<http://www.perfil.com/politica/El-Estado-argentino-debera-indemnizar-a-uno-de-los-secuestradores-de-Macri-por-violar-derechos-humanos-20081203-0013.html>,
(Visitado: 6/05/2014).

<http://edant.clarin.com/diario/2008/12/03/elpais/p-01814731.htm>, (Visitado:
6/05/2014).

Youtube:

“Indemnizar a un secuestrador”, Entrevista a Juan Carlos Bayarri. en:
<https://www.youtube.com/watch?v=0GgSk8OyBNM>, (Visitado: 04/05/2014).

5. Anexos



Anexo 1 Estados miembros del Consejo de Europa

Los **Estados miembros**, por orden de ingreso, son:

Estado	Fecha de ingreso	Estado	Fecha de ingreso
Bélgica	Fundador	Estonia	14-5-1993
Dinamarca	Fundador	Lituania	14-5-1993
Francia	Fundador	Eslovenia	14-05-1993
Irlanda	Fundador	República Checa	30-6-1993
Italia	Fundador	Eslovaquia	30-6-1993
Luxemburgo	Fundador	Rumania	7-10-1993
Países Bajos	Fundador	Andorra	10-11-1994
Noruega	Fundador	Letonia	10-2-1995
Suecia	Fundador	Albania	13-7-1995
Reino Unido	Fundador	Moldavia	13-7-1995
Grecia ^a	9-8-1949	Macedonia	9-11-1995
Turquía ^b	9-8-1949	Ucrania	9-11-1995
Islandia	7-3-1950	Rusia	28-2-1996
Alemania ^c	fundador	Croacia	6-11-1996

Austria	16-4-1956	Georgia	27-4-1999
Chipre	24-5-1961	Armenia	25-1-2001
Suiza	6-5-1963	Azerbaiyán	25-1-2001
Malta	29-04-1965	Bosnia-Herzegovina	24-4-2002
Portugal	22-09-1976	Serbia	3-4-2003
España	24-11-1977	Mónaco	5-10-2004
Liechtenstein	23-11-1978	Montenegro	11-05-2007
San Marino	16-11-1988		
Finlandia	5-5-1989		
Hungría	6-11-1990		
Polonia	26-11-1991		
Bulgaria	7-5-1992		

Los **Estados candidatos a la adhesión**, por orden alfabético, son:

-  República de **Bielorrusia**
-  República de **Kazajistán**

Fuente: <http://www.consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register?lang=es>, (Visitado: 10/10/2014)

Anexo 2 Estados miembros de la Organización de la Unión Africana

State	<u>ACHPR Ratification</u>	Reporting Period	<u>Overdue Reports</u>	<u>Ratification Status*</u>
Argelia	1987	1987 - 2006	4	
Angola	1990	1990 - 2011	1	
Benín	1986	1986 - 2008	3	
Botsuana	1986	1986 - 2009	2	
Burkina Faso	1984	1986 - 2010	1	
Burundi	1989	1991 - 2010	2	
Camerún	1989	1989 - 2013		
Cape Verde	1987	1987 - 1992	11	
República Central Africana	1986	1988 - 2006	4	
Chad	1986	1986 - 1997	8	
Comoras	1986		14	
Congo	1982	1982 - 2008	3	
Costa de Marfil	1992	1994 - 2012	1	
El Congo	1987	1997 - 2007	3	
Yibutii	1991	1993 - 2014		
Egipto	1984	1984 - 2004	5	
Guinea Ecuatorial	1986		14	
Eritrea	1999		7	
Etiopía	1998	1998 - 2014		
Gabón	1986	1986 - 2013		
Gambia	1983	1986 - 1994	10	
Ghana	1989	1990 - 1998	8	
Guinea	1982	1958 - 1997	8	
Guinea-Bissau	1985		14	
Kenia	1992	1992 - 2006	4	
Lesoto	1992	1991 - 2000	7	
Liberia	1982	1984 - 2012		
Libia	1986	1986 - 2011	1	
Madagascar	1992	1991 - 2008	3	
Malawi	1989	1995 - 2013		

State	<u>ACHPR Ratification</u>	Reporting Period	<u>Overdue Reports</u>	<u>Ratification Status*</u>
Mali	1981	1982 - 1998	7	█
Mauritania	1986	1986 - 2005	4	█
Mauritas	1992	1992 - 2008	3	█
Mozambique	1989	1992 - 2013	█	█
Namibia	1992	1992 - 2010	2	█
Níger	1986	1988 - 2014	█	█
Nigeria	1983	1990 - 2013	█	█
Ruanda	1983	1983 - 2009	2	█
Saharai	1986	1988 - 2013	█	█
Sao Tome	1986		14	█
Senegal	1982	1982 - 2013	█	█
Seychelles	1992	1994 - 2004	5	█
Sierra Leone	1983	1983 - 2013	█	█
Somalia	1985		14	█
Sur África	1996	1994 - 2005	4	█
South Sudan	—		█	█
Sudan	1986	1994 - 2011	1	█
Suazilandia	1995	1995 - 2000	7	█
Tanzania	1984	1984 - 2007	3	█
Togo	1982	1982 - 2010	1	█
Túnez	1983	1983 - 2006	4	█
Uganda	1986	1986 - 2013	█	█
Zambia	1984	1986 - 2005	4	█
Zimbabue	1986	1986 - 2006	3	█

Fuente: <http://www.achpr.org/states/> (Visitado: 11/10/2014).

Anexo 3 Estados Miembros de la Liga Árabe

Países miembros de la Liga Árabe:

- Alergia
- Bahréin
- Comoras
- Yibuti
- Egipto
- Iraq
- Jordán
- Kuwait
- Lebanon
- Libia
- Mauritania
- Moroco
- Omán
- Palestina
- Qatar
- Arabia Saudita
- Somalia
- Sudán
- Túnez
- Emiratos Árabes Unidos
- Yemen

Fuente: <http://www.arableagueonline.org/hello-world/#more-1>, (visitado: 12/10/2014).

Anexo 4 Accionar del Estado Ecuatoriano

Caso Ecuatoriano	
Fechas	Proceso
14 de noviembre de 1997	Solicitud de ordenes de detención.
15 de noviembre de 1997	Detención de Juan Chaparro y Freddy Lapo.
15 de noviembre de 1997	Allanamiento de la Fábrica Plumavit.
19 de noviembre de 1997	Declaraciones de Juan Chaparro.
24 de noviembre de 1997	Ejecución de peritaje tras petición del señor Chaparro.
24 de noviembre de 1997	Informe preliminar del Jefe Provincial Antinarcóticos.
8 de diciembre de 1997	Prisión preventiva para Chaparro y Lapo.
8 de diciembre de 1997	Traslado de los sindicados al centro de rehabilitación.
8 de diciembre de 1997	Envío del resultado del peritaje.
5 de enero de 1998	Reconocimiento de la fábrica Plumavit y tres nuevos peritajes.
7 de enero de 1998	Realización del peritaje denominado ION-SCANNER.
9 de diciembre de 1998	Envío del peritaje a la Jueza determinando la presencia de droga.
23 de diciembre de 1998	Declarado inútil el último peritaje.
25 de mayo de 1999	Juez octavo declaró abierta la etapa del plenario en contra del señor Chaparro.
12 de junio de 1999	Liberación del señor Lapo.
22 de agosto de 1999	Liberación del señor Chaparro.
30 de octubre de 2001	Se declaró que el último peritaje no ofrecía garantías.
30 de octubre del 2001	Sobreseimiento provisional al señor Chaparro.
23 de febrero del 2006	Sobreseimiento definitivo para los señores Chaparro y Lapo.

Anexo 5 Artículos de la Convención Americana

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

- a) derecho del inculcado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
- b) comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada;
- c) concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
- d) derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
- e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculcado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
- f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
- g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
- h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculcado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculcado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

- a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
- b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
- c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 46 Admisión de peticiones a la Comisión

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:

- a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
- b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;
- c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y
- d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:

- a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
- b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
- c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Artículo 63 Resolución

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

Fuente: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_De_rechos_Humanos.htm (visitado:13/09/2014).

Anexo 6 Accionar del Estado Argentino

Caso Argentino	
Fechas	Proceso
19 de noviembre de 1991	Captura de Juan Carlos Bayarri.
20 de noviembre de 1991	Bayarri es trasladado al Departamento Central de Policía.
29 de noviembre de 1991	Elaboración de expediente médico.
23 de diciembre de 1991	Denuncia por detención y apremios ilegales en perjuicio al señor Bayarri.
22 de junio de 1995	Bayarri interpuso recurso de excarcelación.
25 de enero de 1996	Rechazo de recurso de excarcelación.
11 de septiembre de 1996	Sobreseimiento provisional por la privación ilegítima de la libertad.
12 de septiembre de 1996	Tercera solicitud de excarcelación por parte del señor Bayarri.
31 de octubre de 1996	Denegación de la solicitud.
9 de enero de 1997	Cuarta solicitud de excarcelación por parte del señor Bayarri.
6 de marzo de 1997	Denegación de la solicitud.
1 de abril de 1997	Investigación acerca del encarcelamiento del señor Bayarri.
11 de agosto de 1999	Presentación de pruebas las cuales hasta esa fecha no tenían sentencia.

Anexo 7. Petición de la víctima, Estado Argentino

Petición de la víctima		Caso Argentino	
Fechas		Proceso	
13 de abril de 1994		Comunicación de la CIDH al Estado.	
27 de septiembre de 1994		Presentación de observaciones por parte del Estado.	
4 de noviembre de 1994 y 18 de enero de 1995		Envío de observaciones por parte del peticionario.	
2 de marzo de 1995		Respuesta por parte del Estado.	
10 de marzo, 23 de julio y 25 de noviembre de 1995		Presentación de observaciones por parte del señor Bayarri.	
18 de marzo, 13 de abril, 13 de julio de 1996 y 22 de enero de 1997		Envío de información adicional por parte del señor Bayarri.	
21 de julio de 1998		Solicitud de la CIDH de información adicional tanto al Estado como al Señor Bayarri.	
15 de septiembre de 1998		Envío de información requerida por parte del señor Bayarri.	
24 de septiembre y 27 de octubre de 1998		Solicitud de prórroga por parte del Estado. Se le fue concedida.	
11 de noviembre de 1998		Envío de información adicional por parte del señor Bayarri.	
9 de diciembre de 1998 y 1 de abril de 1999		Remisión de las observaciones por parte del Estado.	
4 de mayo de 1999		Envío de información adicional por parte del señor Bayarri.	
2 de julio de 1999		Envío de información por parte del Estado.	
14 de julio, 9 de agosto y 12 de octubre de 1999		Envío de información adicional por parte del señor Bayarri.	
10 de enero del 2000		El estado presentó sus observaciones.	

18 de febrero, 30 de mayo, 1 de junio y 12 de julio del 2000	Envío de información adicional por parte del señor Bayarri.
13 de agosto del 2000	Petición de prórroga por parte del estado. Se le fue concedida.
22 de agosto del 2000	La CIDH remitió al Estado información adicional presentada por el señor Bayarri.
5 de diciembre y 29 de diciembre del 2000	El estado y el señor Bayarri presentaron sus observaciones respectivamente.

Anexo 8 Casos Ecuatorianos Ante la CIDH y la CorteIDH 2006-2014

Casos	CIDH	Cumplen las recomendaciones	CorteIDH	Cumple las decisiones
Salvador Chiriboga.	Entra a las CIDH el 22 de octubre de 2003 bajo el número de Caso 12.054.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 12 de Diciembre del 2006.	Se da el cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
Wilmer Zambrano Vélez, José Miguel Caicedo y Segundo Olmedo Caicedo.	Entra a las CIDH el 28 de febrero de 2006, bajo el número de caso 11.579.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 24 de julio del 2006.	Se da el cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
Laura Albán Cornejo.	Entra a las CIDH el 31 de mayo de 2001, bajo el número de caso 12.406.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 5 de julio de 2006.	Se da el cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH; y se lo tomó como referencia para discutir la mala práctica médica en el nuevo código integral penal.
José Alfredo Mejía Idrovo.	Entra a las CIDH el 19 de mayo de 2009, bajo el número de caso 12.530.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 12 de noviembre de 2009.	Se da el cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku y sus miembros.	Entra a las CIDH el 13 de octubre de 2004, bajo el número de caso 12.465.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 26 de abril de 2010.	Se da el cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
Pedro Miguel	Entra a las	No cumple con	Entra a la	Se da el

Vera Vera y Otros.	CIDH 24 de agosto de 2009, bajo el número de caso 11.535.	totalidad las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	CorteIDH el 24 de febrero de 2010.	cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
Miguel Camba Campos y otros (Vocales del Tribunal Constitucional).	Entra a las CIDH el 27 de febrero de 2007, bajo el número de caso 12.597.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 28 de noviembre de 2011.	Se da el cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
Hugo Quintana Coello y otros (Corte Suprema de Justicia).	Entra a las CIDH el 15 de marzo de 2007, bajo el número de caso 12.600.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 2 de agosto de 2011.	Aún no se da cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
Marco Bienvenido Palma Mendoza y otros.	Entra a las CIDH el 12 de octubre de 2010, bajo el número de caso 12.004.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 24 de febrero de 2011.	La CorteIDH dio la razón a la República del Ecuador, al declarar que no existió una violación a los derechos humanos.
Melba del Carmen Suárez Peralta.	Entra a las CIDH el 30 de octubre del 2008, bajo el número de caso 12.683.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 26 de enero de 2012.	Se da el cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
José Luis García Ibarra.	Entra a las CIDH bajo el número de caso 11.576.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 23 de noviembre de 2013.	Aún no existe sentencia dada por la CorteIDH.
TGGL y familia.	Entra a las CIDH , bajo el número de caso 12.723.	No cumple con las recomendaciones dadas por la	Entra a la CorteIDH el 18 de febrero de 2014.	Aún no existe sentencia dada por la CorteIDH.

		CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.		
--	--	---	--	--

Anexo 9 Casos Argentinos Ante la CIDH y la CorteIDH 2006-2014

Casos	CIDH	Cumplen las recomendaciones	CorteIDH	Cumple las decisiones
Juan Francisco Bueno Alves.	Entra a las CIDH el 21 de septiembre de 1999, bajo el número de caso 12.425.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 31 de marzo de 2006.	Se da el cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
Eduardo Kimel.	Entra a las CIDH el 28 de febrero de 2003, bajo el número de caso 12.450.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 10 de abril de 2007.	Se da el cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
Jorge Fontevicchia y Héctor D'Amico.	Entra a las CIDH el 12 de octubre del 2005, bajo el número de caso 12.524.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 10 de diciembre de 2010.	Se da el cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
Milagros Fornerón y Leonardo Aníbal Fornerón.	Entra a las CIDH el 26 de octubre de 2006, bajo el número de caso 12.584.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 29 de noviembre de 2010.	Aún no se da cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
Jorge Fernando Grande.	Entra a las CIDH el 27 de febrero 2002, bajo el número de caso 11.498.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 4 de mayo de 2010.	Aún no se da cumplimiento de las decisiones de la CorteIDH.
Carlos y Pablo Mémoli.	Entra a las CIDH el 5 de agosto del 2008, bajo el número de caso 12.653.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 3 de diciembre de 2011.	Aún no existe sentencia dada por la CorteIDH.
Jorge Omar	Entra a las	No cumple con	Entra a la	Aún no existe

Gutiérrez y familia.	CIDH el 20 de febrero del 2003, bajo el número de caso 12.221.	las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	CorteIDH el 19 de agosto de 2011.	sentencia dada por la CorteIDH.
César Alberto Mendoza y otros - Prisión y reclusión perpetuas a adolescentes.	Entra a las CIDH el 14 de marzo de 2008, bajo el número de caso 12.651.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 17 de junio de 2011.	Aún no existe sentencia dada por la CorteIDH.
Oscar Alberto Mohamed.	Entra a las CIDH el 22 de febrero de 2005, bajo el número de caso 11.618.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 13 de abril de 2011.	Aún no existe sentencia dada por la CorteIDH.
Sebastián Claus Furlán y familia.	Entra a las CIDH el 2 de marzo de 2006, bajo el número de caso 12.539.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 15 de marzo de 2011.	Aún no existe sentencia dada por la CorteIDH.
Hugo Oscar Arguelles y otros.	Entra a las CIDH bajo el número de caso 12.167.	No cumple con las recomendaciones dadas por la CIDH y el caso es remitido a la CorteIDH.	Entra a la CorteIDH el 29 de mayo de 2012.	Aún no existe sentencia dada por la CorteIDH.

